

# Meta: Análisis de la conflictividad

PaVT/gid

 Asdi

Área de paz,  
desarrollo y  
reconciliación



**PN**  
**UD**  
Colombia

Bruno Moro  
Representante Residente - PNUD

María del Carmen Sacasa  
Directora de País A.I.

Elaborado por  
Área de Paz, Desarrollo y Reconciliación

Alessandro Preti  
Coordinador del Área de Paz, Desarrollo y Reconciliación

Olga González Reyes  
Astrid Elena Villegas  
Unidad de Análisis

Jenny Galvis y equipo  
Coordinadora (e) de la oficina territorial del Meta

Reconocimiento especial  
Dirección de Prevención de Crisis y Recuperación del PNUD,  
Nueva York (BCPR, por su sigla en inglés)

Agradecimientos  
Observatorio de Derechos Humanos. Banco de Datos Regional Suroriente.  
Corporetoños. Mesa Humanitaria del Meta. CINEP. Laboratorio de Paz. Red de  
Mujeres del Meta. Secretariado Regional de Pastoral Social. Cáritas Suroriente  
Colombiano. Defensoría Regional del Pueblo. Personería Municipal de Villavicencio.  
Oficina Promotora de Paz de la Gobernación del Meta.

Diseño, impresión y acabados  
Impresol PBX: 2508244  
[www.impresolediciones.com](http://www.impresolediciones.com)

Las opiniones y planteamientos expresados no reflejan  
necesariamente las opiniones del PNUD, su junta directiva,  
ni los Estados miembros.

Junio de 2010



El análisis que se presenta a continuación se apoyó en entrevistas realizadas en terreno a representantes de instituciones del Estado; líderes sociales, de organizaciones y espacios de articulación social. También fueron de utilidad algunas investigaciones sobre la región, elaboradas por la academia y ciertos observatorios.

Su elaboración se basa en la metodología “Análisis del desarrollo relacionado con el conflicto” (Conflict-related Development Analysis - CDA, por su sigla en inglés), herramienta preparada por la Dirección para la Prevención de Crisis y la Recuperación del PNUD (Bureau for Crisis Prevention and Recovery (BCPR), utilizada en diferentes países del mundo.



# Contenido

4	Antecedentes
5	Las causas estructurales y coyunturales de la violencia, y los actores
6	Zona marginal y de colonización
10	La colonización armada y cocalera
13	El boom de narcotráfico y autodefensas
18	Confluencia de actores
19	Actores locales y construcción de paz
26	Situación actual y dinámicas
26	Situación social
30	Situación económica
42	Situación política y de gobernabilidad
48	Impacto del conflicto armado
65	Escenarios posibles y tendencias
65	Agudización del problema de la tierra y del impacto social
66	Aumento en la pobreza y las necesidades básicas insatisfechas
68	La agudización de la confrontación armada y los problemas de seguridad
69	Incremento de la problemática en poblaciones de mayor vulnerabilidad
70	Creciente interés en continuar con esfuerzos de construcción de paz
70	Identificación de caminos a seguir
70	Prevención y mitigación de los efectos del conflicto
74	Transformación de conflictos y cultura de paz
75	Verdad, justicia, reparación y derechos humanos
77	Gobernabilidad, democracia local y construcción de paz
77	Desarrollo social y económico sostenible para la paz

# 1. Antecedentes



Meta es uno de los 32 departamentos de Colombia, nacido jurídicamente como tal el 1° de julio de 1960. Tiene 29 municipios, con 789.276 habitantes, principalmente mestizos, indígenas de comunidades distribuidas en 26 resguardos y población afrocolombiana. Según el Censo del DANE - 2005, el 1,26% de la población es de indígenas, el 2,51% de afrocolombianos, el 0,01% de raizales y el 94,68% no pertenece a un grupo étnico determinado. De ellos, 579.195 personas viven en los cascos urbanos (73,3%) y 210.081 (26,6%) en zonas rurales.

Villavicencio es la capital y el principal centro urbano de la región, donde habita el 48,5% (382.799) del total de la población del departamento, y está ubicada a tan solo 89,9 kilómetros al sur de Bogotá, la capital de Colombia.

En Meta se reconocen tres grandes subregiones:

- ▶ Piedemonte: está integrada por los municipios de Restrepo, Cumaral, El Calvario, San Juanito, Acacías, Guamal, Castilla la Nueva, San Carlos de Guarda, Cabuyaro, Barranca de Upía, Puerto López y Mapiripán.
- ▶ Ariari-Guayabero: conformada por los municipios de El Castillo, El Dorado, Fuente de Oro, Granada, La Macarena, Uribe, Lejanías, Puerto Concordia, Puerto Lleras, Puerto Rico, San Juan de Arama, San Luis de Cubarral, Mesetas y Vistahermosa.

- ▶ El eje Puerto Gaitán-San Martín-Villavicencio, subregión ubicada en los márgenes del río Meta.

Se caracteriza por su gran riqueza hídrica, con numerosos afluentes del río Orinoco que cruzan el departamento y que nacen en la cordillera Oriental y, además, por tener uno de los parques naturales más reconocidos como es el de la serranía de La Macarena. Tiene, adicionalmente, el reconocimiento del país por poseer algunas de las reservas petroleras más importantes del país.

En su grado de conflictividad han sido determinantes su ubicación geopolítica, su historia de colonización y su formación social y política.

Numerosas características han colocado al departamento en el centro de atención de los actores armados ilegales, principalmente la guerrilla de las FARC-EP, los grupos de autodefensa y las estructuras emergentes o neoparamilitares. Pero, también, de políticos y de importantes actores económicos, nacionales e internacionales, que con sus acciones han buscado el desarrollo, aunque al mismo tiempo han generado más fuentes de conflictividad. La disputa por el territorio ha hecho que esta sea una de las zonas más violentas y que su población se halle entre las principales víctimas en el país.

Sus altos niveles de violencia, marginalidad y pobreza; la presencia de grupos armados fuera de la ley; el narcotráfico y los cultivos de uso ilícito no explican el origen del conflicto, pero son su combustible y han abonado la complejidad de los escenarios departamental y nacional y los múltiples conflictos políticos, sociales y económicos, históricamente no resueltos.

## 2. Causas estructurales y coyunturales de los conflictos y sus actores

Varios son los factores de carácter estructural y los coyunturales que explican la conflictividad de Meta, incluido el deteriorado conflicto armado que padece. Sus causas se podrían agrupar en las siguientes categorías:

- ▶ **Causas políticas:** entre las causas estructurales se incluyen la debilidad institucional, el desequilibrio de poderes, la exclusión política y la escasa participación política de fuerzas diferentes a las tradicionales, la falta de opciones y oportunidades para que los ciudadanos metenses se expresen y participen libremente, así como las limitadas relaciones entre el centro y la región. A ellas, se suman, entre las causas coyunturales o detonantes de las conflictividades, la infiltración de grupos armados ilegales en los diferentes ámbitos del departamento, los altos niveles de corrupción política y administrativa, el aumento en las violaciones de los derechos humanos, la impunidad y el incremento de las víctimas.

- ▶ **Causas socioeconómicas:** en esta categoría se incluyen la pobreza, la inequidad en la distribución y el uso de la tierra y de otros bienes económicos, los desequilibrios que se observan en el departamento, así como la débil política social y económica para promover un desarrollo humano, que no ha permitido que la ciudadanía pueda acceder de manera plena a los servicios sociales básicos, como la salud o la educación. Entre estas causas también se evidencian la preocupante condición social de las minorías y las mujeres, la falta de oportunidades para las poblaciones en mayor estado de vulnerabilidad, la economía de la coca, el nuevo modelo de desarrollo que se ha venido imponiendo en la región y la agudización del problema de la tierra.
- ▶ **Causas relacionadas con la seguridad:** se incluyen la presencia histórica de las FARC y el narcotráfico, el surgimiento de las autodefensas y las estructuras emergentes, la violación de los derechos humanos por parte de los diferentes grupos armados y el aumento de la confrontación armada.

Es necesario partir de estas causas estructurales y coyunturales para entender la naturaleza de los conflictos que afectan a Meta, para tener mayor claridad sobre el contexto en que se dan las iniciativas de construcción de paz y, por tanto, para definir el tipo de intervención del PNUD o de cualquier otro actor en este territorio.

## Zona marginal y de colonización

Su ubicación en la región Central de Colombia es estratégica, por ser un territorio de tránsito y conexión entre el centro andino y el oriente del país. Se extiende en el denominado Piedemonte Llanero, al oriente de la región andina y al occidente de los Llanos Orientales. Al norte limita con los departamentos de Cundinamarca, Casanare y Bogotá; por el oriente con Vichada; por el sur con Caquetá y Guaviare, y por el occidente con Huila y Cundinamarca.

Se le conoce como la puerta de entrada a la gran región de la Orinoquia colombiana y al centro del país. Por eso, en Meta se encuentra el municipio de Puerto López, llamado “el ombligo de Colombia”<sup>1</sup>.

Sin embargo, su estratégica ubicación no le ha significado ser centro de atención por parte del Estado. Históricamente, esta fue una región marginal y periférica donde era muy limitada la presencia de la institucionalidad, que no tenía mayor contacto con la capital y que estaba alejada de los polos de desarrollo. Por un lado, dadas las distancias entre el departamento y el centro administrativo nacional –la distancia entre esas dos Colombia, la del centro y la de las regiones–; y, por otro, por ser uno de los departamentos más extensos del país, con un área de 85.770 km<sup>2</sup>, que equivale al 7,5% del territorio nacional.

<sup>1</sup> Gobernación del Meta, en la página web [http://www.meta.gov.co/index.php?option=com\\_content&task=view&id=1571&Itemid=231](http://www.meta.gov.co/index.php?option=com_content&task=view&id=1571&Itemid=231). Consultada el 01/05/2010.



La historia de Meta refleja lo que sería una característica general del país: las diferencias entre zonas, departamentos y regiones, que han significado un problema de equidad y fuertes desequilibrios territoriales, que, a su vez, han generado una serie de frenos al desarrollo económico y social.

En esta región primaron –y aún hoy, en menor escala– la pobreza, la inequitativa distribución de la riqueza y las desigualdades. Los pobladores se sentían abandonados y olvidados por un Estado que de manera poco frecuente hizo presencia. Estos grandes desequilibrios se convirtieron en fuente de movimientos migratorios y tensiones sociales. Tal situación caracterizó esta histórica región de colonización, porque fue en Meta, a partir de la década de los años 50 del siglo XX, donde se dieron procesos de colonización que han sido clave en su configuración sociopolítica y económica y en su conflictividad. Analistas sociales y del conflicto han determinado al menos tres tipos de colonización<sup>2</sup>:

- ▶ **Colonización armada: auspiciada** por el Partido Comunista en sus zonas de influencia. Ante los operativos militares durante el Gobierno de Gustavo Rojas Pinilla (1954-1957) y los primeros años del Frente Nacional, se agrupó en lo que se llamó “repúblicas independientes”. Este periodo se ubica en los años 50, y hace parte del más amplio lapso de la violencia en Colombia.
- ▶ **Colonización institucional dirigida:** implementada por el Estado mediante las entidades encargadas del tema agrario. Su periodo abarca la década de los años 60. En este proceso se ubica la fracasada política de normalización y reconciliación de Alberto Lleras Camargo (1958-1962), a raíz de la cual se inició el proyecto de colonización Meta I, dirigido por el Incora. Ambos proyectos desembocaron en la descomposición del campesinado y el ingreso del empresariado a la región.
- ▶ **Colonización intermitente y espontánea:** obligada por la violencia padecida en las zonas andinas del país, en su mayoría liberales, que entraron por Villavicencio y que se puede ubicar entre 1948 y 1953. En la década de los años 80 se presentó una segunda oleada estimulada por la “bonanza coquera”.

Estas tres olas se diferencian por su ubicación geográfica, así como por sus dinámicas sociopolíticas, así:

- ◆ La del Piedemonte Llanero: región conservadora, colonizada básicamente por familias provenientes de Boyacá y Cundinamarca. En esta zona predomina la mediana propiedad agrícola en las partes planas y la pequeña propiedad en la zona montañosa.
- ◆ La del Ariari-Guayabero: corresponde a un proceso de colonización más reciente, llevado a cabo en esencia por campesinos provenientes de Tolima, Huila y Cundinamarca, que fueron obligados a migrar por la violencia política de mediados de siglo XX y, posteriormente, seducidos por la bonanza coquera de los 80. En esta zona, las afi-

2 La historia de la colonización es tomada de un estudio sobre Meta y otras regiones, elaborado por PNUD-Cinep-Synergia, en proceso de publicación.

liaciones políticas se encuentran divididas. En el bajo y medio Ariari predominan los liberales, mientras que en el alto Ariari y Guayabero las mayorías son de izquierda. La región también se caracteriza por presentar álgidos conflictos derivados de la disputa por la tierra y las dificultades para su titulación a los colonos.

- ◆ La del eje Puerto Gaitán-San Martín-Villavicencio: se caracteriza por sus mayorías liberales y por ser la región más importante del departamento en términos demográficos y económicos (ya que incluye a Villavicencio). La llanura predomina en la geografía. Hay una alta concentración de la tierra en grandes propiedades que están dedicadas fundamentalmente a la ganadería extensiva y los cultivos agroindustriales. Su proceso de colonización se inició en Villavicencio y, tanto a comienzos de siglo anterior como en los años 50, su área de influencia se desplazó hacia la parte nororiental de Puerto López y Puerto Gaitán.

El proceso de colonización en estas subregiones se caracterizó especialmente por su carácter político y social. "Carácter político porque está muy ligado a la construcción de espacios partidistas y al nacimiento del Estado local; pero en especial porque en lo social, los campesinos que poblaron las zonas más alejadas e inhóspitas tenían, de alguna forma, la intención de preservarse identidad y su forma de vida"<sup>3</sup>. Estos son hoy actores sociales clave en la región.

Ese proceso provocó la colonización de extensos bosques baldíos, la creación de nuevos municipios y el establecimiento de poblaciones migrantes y de comunidades partidistas en distintas zonas, en las que era claro el predominio o de los liberales (como en Granada) o de los conservadores (Acacías) o del Partido Comunista y la Unión Patriótica.

Desde los años 50, la violencia fue una de las características entre todas las fracciones políticas por razones ideológicas y económicas –en especial en el alto Ariari–, lugar donde surgieron comunidades y élites políticas que fueron fundamentales en la configuración de la subregión, en la formación del Estado local y en la historia de conflicto de la región<sup>4</sup>.

En este territorio del país empezaron a darse los primeros pasos de lo que serían las FARC y las raíces del por qué esta guerrilla ha logrado en el Meta un apoyo social y ha expandido allí un dispositivo militar: ha sido sede del estado mayor del bloque Oriental, de su secretariado nacional y de algunas de sus principales conferencias, además de haber servido de espacio para diálogos con los Gobiernos.

La influencia de este grupo guerrillero en la población se remonta a la tradición de las luchas agrarias colombianas desde los años 20 del siglo pasado, a la consigna de las "autodefensas de masas", lanzada el 7 de noviembre de 1949 por el Partido Comunista en respuesta



3 Gutiérrez, Omar (2005). *Desarrollo rural alternativo y economía política de la coca en el Meta, 1982 y 2004*. PNUD y ASDI, p. 96.

4 *Ibidem*.



al asesinato del caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de abril de 1948, y a una violencia oficial que intentaba imponer un modelo bipartidista.

Fue en los Llanos Orientales donde en la década de los 50 el Partido Liberal decidió promover guerrillas para oponerse al poder militar del Gobierno conservador. En esta y otras regiones del país se crearon bandas armadas irregulares, unas afines al Gobierno del Partido Conservador y otras cercanas a miembros del Partido Comunista. De aquí surgieron figuras guerrilleras (como Eliseo Velásquez, Franco Isaza, Guadalupe Salcedo, Juan de Jesús Franco, los hermanos Loaiza y Manuel Marulanda Vélez, Tirofijo) que hoy siguen siendo punto de referencia para los movimientos guerrilleros.

Las guerrillas liberales y comunistas empezaron a avanzar y reivindicar profundos cambios políticos y sociales, que eran los mismos que reclamaban los pobladores. Sin embargo, en la época de la hegemonía conservadora y del Gobierno del general Rojas Pinilla no hubo posibilidad a una participación amplia y pluralista, como tampoco de la creación del llamado esquema gobierno-oposición, que le abriera espacio a otras fuerzas que reclamaban ser escuchadas. Quienes se sintieron excluidos, encontraron en esos grupos un espacio de acción.

La población que se sentía excluida y venía trabajando para lograr muchas de sus reivindicaciones sociales sintió que se abría una posibilidad para responder a sus necesidades cuando el general Gustavo Rojas Pinilla buscó un acercamiento con los líderes de las guerrillas con la garantía de una amnistía a cambio de transformaciones sociales. Entre junio y noviembre de 1953, los combatientes del Llano, Antioquia y Santander dejaron las armas sobre la base de unas condiciones, que para esa guerrilla nunca se cumplieron. Algunos de los guerrilleros desmovilizados y símbolo de la lucha, como Guadalupe Salcedo, fueron asesinados. Frente al asesinato de sus líderes, la guerrilla comunista se negó a entregar las armas y continuó su lucha.

Esta guerrilla, vinculada a la acción del Partido Comunista Colombiano, creó zonas de “autodefensa”, donde mezclaba todas las formas de lucha, la política y la armada, y actuaba en la ciudad y el campo para resistir a un Estado y unas fuerzas armadas que buscaban su sometimiento a la hegemonía bipartidista.

Según las propias FARC, “a principios de 1955, Rojas Pinilla declara la región del Sumapaz y oriente del Tolima ‘zona de operaciones militares’, dando inicio a la ‘Guerra de Villarrica’. Entre tanto, Manuel Marulanda Vélez (Tirofijo) y Ciro Trujillo Castaño, mantienen en el sur del Tolima y Tierradentro (Cauca), otro frente de lucha. La Resistencia de los guerrilleros se prolongó cerca de tres años, optando por organizar a la población civil en columnas que se desplazan

La influencia de las Farc en la población se remonta a las luchas agrarias colombianas desde los años 20 del siglo pasado.

por Bejucales, el Doa, Galilea, para llegar a El Pato (Caquetá) y a El Guayabero (Meta); otros combatientes se ubican en el Alto Sumapaz, donde florecen grandes movimientos agrarios<sup>5</sup>.

Para los historiadores, estos son antecedentes importantes para entender parte del comportamiento ciudadano en esta región del país y, además, para comprender las dinámicas futuras del conflicto, porque esta ofensiva militar contra Villarrica sería el antecedente de la guerra de contrainsurgencia que después, bajo el Gobierno de Guillermo León Valencia, el Ejército puso en práctica en amplias zonas del país, hecho que llevó a que columnas guerrilleras se desplazaran desde regiones influidas por el Partido Comunista hacia muchas zonas donde las FARC terminan por tener un fuerte arraigo territorial, como es el caso de lo que más tarde (en 1960) se llamaría el departamento del Meta.

A pesar de las operaciones del Ejército para someter a la guerrilla y a las que se conocerían como sus “repúblicas independientes”, sobrevivió la situada en Marquetalia, de tendencia liberal y comunista y entre quienes se encontraba Manuel Marulanda, quien más tarde, en 1966, fundó las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Para la guerrilla,

“lo que existía detrás de estas pretendidas ‘Repúblicas Independientes’ era un movimiento agrario de autodefensa, el cual se había venido conformando tras un largo proceso de colonización en las zonas de Marquetalia, Riochiquito, El Pato y Guayabero. Estas zonas agrarias contaban con una estructura organizativa propia, con formas de autogestión manteniendo su carácter defensivo armado<sup>6</sup>.”

El 20 de julio de 1964, los combatientes de Marquetalia proclamaron el “Programa Agrario de las guerrillas”, que para las FARC sigue siendo la base de su actual programa agrario y en el que están incluidos muchos de los reclamos que hoy hace el campesinado.

## La colonización armada y cocalera

Las FARC encuentran sus “santuarios” en las regiones marginales y periféricas, como el Meta, a las cuales acuden sectores campesinos expulsados de sus parcelas de origen por la violencia oficial y que reclaman su derecho a la tierra. La “colonización armada” combina su aparato militar, especialmente en zonas de asentamiento colonizador, con la organización social y política de los pobladores. Muchos de ellos terminan adhiriendo al programa revolucionario. Este es otro factor que llevó a la expansión territorial de dicha guerrilla, a partir de la década de los 60 y hasta los 90, en un proceso que fue lento pero continuo.

Ante la violación constante de los derechos humanos de los pobladores por parte de la guerrilla, y también de agentes del Estado, tuvo especial significado la aprobación de la Ley General de Amnistía, en noviembre de 1982, y la derogación del Estatuto de Seguridad del

5 *Las FARC por las FARC. Consultada en la Agencia Bolivariana de Prensa, <http://www.abpnoticias.com/>*

6 *Ibidem.*



Gobierno de Turbay Ayala (1978-1982), hechos que permitieron que se abriera, por primera vez, la posibilidad de un diálogo entre esa guerrilla y un Gobierno (el de Belisario Betancur, 1982-1986) y que su sede fuera, precisamente, La Uribe, Meta.

De este proceso surgieron los acuerdos de cese al fuego y tregua, el 28 de marzo de 1984. En esos acuerdos, las partes se comprometieron a un cese bilateral del fuego y a la búsqueda de una salida política al conflicto. Un papel importante cumplió la participación de la sociedad civil, los partidos políticos y diferentes fuerzas sociales.

Desde entonces, como aún hoy, la guerrilla insiste en “una apertura democrática que garantice el libre ejercicio de la oposición y su acceso a todos los medios de comunicación social, su organización, su lucha y movilización hacia crear un clima de participación popular en las gestiones del Estado”<sup>7</sup>. Según ella, este sigue siendo un reclamo también de muchos colombianos.

Como fruto de esos diálogos y de sus “acuerdos de la Uribe”, se convino el surgimiento de un movimiento de oposición (la Unión Patriótica) como mecanismo para que la guerrilla se incorporara paulatinamente a la vida legal y que tendría una presencia especial en Meta. El Gobierno se comprometió a garantizar plenamente los derechos políticos a los integrantes del nuevo partido y a realizar reformas democráticas para el pleno ejercicio de las libertades civiles.

La Unión Patriótica, nacida en 1984, empezó a lograr importantes resultados electorales que superaron, en algunos casos, a las fuerzas partidistas tradicionales. En su momento de mayores éxitos (1986), eligió 16 alcaldes, 256 concejales y 16 representantes al Congreso. La presencia de colonos y organizaciones con inspiración comunista sería la clave para el fortalecimiento en el Meta de este partido. Sin embargo, en la medida en que esta nueva fuerza conseguía poder local, la violencia contra sus integrantes se empezaba a sentir en el país, en especial en algunos municipios del Meta como Puerto López, Puerto Gaitán y El Castillo.

“Un caso ejemplar de esta situación fue el del municipio de El Castillo, Meta. Allí, uno tras otro, fueron destituidos o asesinados cuatro alcaldes de la UP junto con otros funcionarios de la administración local de la misma filiación ... Más tarde se denunciaría la existencia de planes de exterminio elaborados desde el seno de las propias fuerzas militares para acabar con las bases de la organización política en varias regiones del país y con sus líderes más destacados. El ‘Plan Esmeralda’ (1988), por ejemplo, tuvo por objeto barrer con la influencia de la UP y el Partido Comunista en los departamentos del Meta y Caquetá; dos de las regiones en las que se obtuvieron los mejores resultados en los comicios, superando incluso a los partidos liberal y conservador”<sup>8</sup>.

7 *Ibidem.*

8 Cepeda Castro, Iván. *Genocidio político: el caso de la Unión Patriótica en Colombia*. Consultado el 01/03/2010 en <http://www.desaparecidos.org/colombia/fmcepeda/genocidio-up/cepeda.html#sdfootnote18sym>

Narcotraficantes, facciones regionales liberales y conservadoras, sectores contrainsurgentes, entre ellos miembros de las fuerzas militares, provocaron el exterminio físico y político de la Unión Patriótica en el ámbito nacional, principalmente en el Meta. Durante la campaña electoral de 1989 fueron asesinados tres de los candidatos presidenciales: Luis Carlos Galán, del Partido Liberal, en 1989; Carlos Pizarro Leongómez, de la Alianza Democrática M-19, y Bernardo Jaramillo, de la UP, en 1990. El asesinato de Jaramillo fue el segundo contra un candidato de este partido, pues en 1987 la misma suerte corrió Jaime Pardo Leal.

En dos décadas, más de 3.000 de los integrantes de la UP fueron asesinados, incluyendo los dos candidatos presidenciales y 13 parlamentarios. Otros no tuvieron otro camino que el exilio. Hoy, las organizaciones de víctimas reclaman que esa cadena de muerte sea declarada como un genocidio, mientras que las víctimas de las diferentes regiones del país, entre ellas las de Meta, piden verdad, justicia y reparación.

En dos décadas, más de 3.000 integrantes de la UP fueron asesinados, incluyendo dos candidatos presidenciales y 13 parlamentarios.

El exterminio también lo padecieron muchos dirigentes, líderes y representantes sociales de movimientos políticos y comunitarios, campesinos, de defensores de los derechos humanos y, en general, del movimiento popular, social y sindical que se había consolidado de manera paralela con el partido de izquierda. Esa fragmentación social se dio en el país, en especial en una región como el Meta.

A la ruptura de la tregua pactada en Uribe, durante el Gobierno de Virgilio Barco (1986-1990), por actos realizados por la guerrilla y por el asesinato de sus líderes, le sigue otro hecho que marcaría a la región y el país. Las decisiones del presidente César Gaviria (1990-1994) de convocar la Asamblea Nacional Constituyente –en la que participa el M-19, pero no la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB), que reunía a las FARC– y de ordenar, el 9 de diciembre de 1990, el mismo día de las elecciones para la Constituyente, un operativo militar en la Uribe contra Casa Verde, sede del secretariado nacional de las FARC-EP, en un intento por acabar con su estado mayor.

Este hecho no impidió que las FARC continuaran utilizando al Meta como un lugar para sus acciones más importantes y sede de sus conferencias, como la octava conferencia celebrada en abril de 1993 en la Uribe y desde la cual lanzan lo que llaman “la plataforma de un gobierno de reconstrucción y reconciliación nacional”.

Tampoco fue obstáculo para que sus zonas históricas de influencia se convirtieran posteriormente en sede de diálogos de paz. A los diálogos fracasados de Caracas y México entre la Coordinadora y el Gobierno (iniciados el 3 de junio de 1991), siguió el Gobierno de Ernesto Samper (1994-1998) sin diálogos posibles y, posteriormente, el Gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), en el que se iniciaron negociaciones de paz en una zona de distensión que comprendió cinco municipios: cuatro del Meta (Uribe, Mesetas, La Macarena y Vistahermosa) y uno de Caquetá (San Vicente del Caguán).



Ser sede de los diálogos fracasados del presidente Pastrana hizo que esta zona y sus líderes fueran estigmatizados, que fueran víctimas de amenazas, asesinatos y desplazamiento y que sufrieran bloqueos económicos. Pero, además, se convirtió en la región donde se realizarían importantes operaciones militares para la recuperación del territorio.

## El boom del narcotráfico y las autodefensas

La historia de la región se ha caracterizado no solo por la colonización agraria (década de los 50) y armada (década de los 60), sino también por una colonización cocalera, que se empezó a dar a partir de los años 80 y, posteriormente, se consolidó con la aparición de narcotraficantes y grupos de justicia privada, a partir de los 90.

La comunidad del Meta vivió un auge de la economía ilícita, que para algunos analistas se trató de una “revancha histórica” de aquellos colonos que habían llegado a la zona a partir de los años 20, que habían sido obligados a desplazarse y a abandonarlo todo y que no contaban con una respuesta del Estado a sus necesidades básicas. Otros llegaron al departamento ante el auge de los cultivos ilícitos, y muchos más fueron pobladores (raspachines) que aparecían en la zona para trabajar en las plantaciones de coca.

El negocio de la coca significó el abandono del campo, unas relaciones económicas mediadas por ese producto, unos vínculos estrechos entre los grupos armados y esta economía ilegal, la llegada al territorio de nuevas fuerzas ilegales detrás del lucrativo negocio y que el departamento se convirtiera en uno de los principales productores de hoja de coca en el país. Adicionalmente, significó que la economía de la droga permeara diferentes escenarios del departamento y que se diera una disputa por el territorio y por las mejores tierras, que en su momento fueron de campesinos.

En otras palabras, en esta disputa por el control político, económico y territorial de Meta, tanto de legales como de fuerzas ilegales, un papel primordial tuvo la economía de la coca, que se convirtió en motor de los conflictos social y armado y en la extensión e intensificación de los mismos: ha financiado el aparato militar de guerrilla y autodefensas; ha provocado pugnas entre estos grupos por el control de zonas estratégicas para la producción y comercialización de la coca, como por ejemplo en La Macarena y Vista Hermosa; ha generado crisis en la economía local y ha permeado la vida de la región en sus diferentes ámbitos. Su poder corruptor ha llegado a todas las esferas haciendo mella importante en los valores y pautas de comportamiento social.

La problemática de los cultivos ilícitos terminó por tener una relación directa con varias dimensiones de la situación política, social y económica de Meta. Por un lado, la dinámica del conflicto interno se transformó gracias a la relación de los grupos armados ilegales con los cultivos de uso ilícito y el procesamiento y el tráfico de los estupefacientes. Por otro, buena

parte de esta región de frontera agrícola y de economía campesina, carentes de servicios públicos y sociales, de infraestructura de producción y de comunicaciones y sin posibilidades de acceso al crédito, encontró en los cultivos ilícitos una forma de obtener ingresos y sobrevivir.

Pese a esta economía ilícita, se ha mantenido la base cultural, social y económica campesina, aunque este sector sigue reclamando del Estado opciones de desarrollo para la sustitución de sus cultivos de hoja de coca.

El tráfico de estupefacientes trajo detrás de sí a grupos de justicia privada que al llegar a Meta lograban varios objetivos. Uno, llevar su esquema antiterrorista del norte de Colombia al sur del país y exactamente a uno de los llamados santuarios de las FARC. Y otro, entrar en el lucrativo negocio de la hoja de coca.

Desde 1975, nombres como el de Gonzalo Rodríguez Gacha fueron conocidos en la región porque controlaban, primero, el negocio de la marihuana y, después, el de la coca. Fue él quien introdujo a los paramilitares ante la amenaza que, por una parte, representaban las FARC y su relación con el control del negocio de la droga, y, por otro, la nueva fuerza política de izquierda, la Unión Patriótica, que cada día ganaba mayor posibilidad de alcanzar importantes cargos públicos en la región. Ante esta realidad, él, y después algunos ganaderos y comerciantes de la zona, se encargaron de financiar la llegada de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) a la región como instrumento de la lucha armada y política en el Meta contra la subversión y la Unión Patriótica.

Así, la presencia paramilitar se convirtió en un factor determinante en la evolución del conflicto y la configuración de los poderes políticos y económicos regionales. En la década de los 80,

“desde Puerto López y Puerto Gaitán sobre el río Meta, se afianzó una estructura de seguridad con el uso de ejércitos privados sostenidos por inversionistas legales y narcohandlers. También se consolidó este modelo en la zona de influencia de los municipios de San Martín y El Dorado, en el Meta. Gonzalo Rodríguez Gacha y Víctor Carranza Niño fueron quienes impulsaron este recorrido paramilitar y más tarde los narcotraficantes del Cartel de Cali y Leónidas Vargas”<sup>9</sup>.

En la década de los noventa, desde 1997, se manifiesta en la región la presencia de los paramilitares de Córdoba y Urabá. Diversos grupos de justicia privada llegaron al Meta. Por un lado, las Autodefensas Campesinas del Casanare, que hicieron presencia en el nororiente del departamento, lideradas por Héctor Germán Buitrago, alias Martín Llanos. Y por otro, las Autodefensas de Meta y Vichada, al mando de alias Guillermo Torres, quienes estaban en Cesar, Santander, Cundinamarca y Boyacá y se expandieron hacia algunas zonas cocaleras



<sup>9</sup> Colombia nunca más - Nacionalización del paramilitarismo en la zona séptima, capítulo VI. Consultada en <http://www.derechos.org/nizkor/colombia/libros/nm/z7/ZonaSiete04.html>

del alto Ariari en el Meta y Vichada. Y, además, el bloque Centauros –liderado por Miguel Arroyave– articulado a las AUC.

Entraron al departamento para quitarle el poder a la guerrilla, apropiarse de las zonas de cultivos ilícitos y de los corredores estratégicos para su comercialización, desarrollar sus propios proyectos en respuesta a sus intereses económicos y para controlar los aparatos y espacios políticos. Utilizaron las masacres, cuyas víctimas fueron acusadas de ser colaboradoras de la guerrilla, y el desplazamiento masivo de pobladores para apropiarse de sus tierras. En ese entonces, las principales víctimas fueron los miembros de la Unión Patriótica, sus simpatizantes o las autoridades locales elegidas a nombre del nuevo partido.

Los colonos, que en los años 20, 30 y 40 habían llegado a la región expulsados por la violencia política y en busca de tierra, fueron nuevamente, y 50 años después, víctimas del mismo despojo, en esta ocasión, por paramilitares en asocio, en algunos casos, con fuerzas de la economía tradicional de Meta. La tierra fue y sigue siendo, como al inicio del siglo pasado, una de las principales problemáticas que preocupa a las organizaciones de la región.

Con las masacres de Mapiripán, ocurrida en 1997, y la de Puerto Alvira, en 1988, las auto-defensas iniciaron una arremetida contra las FARC, con un alto impacto en la población civil.

“El Bloque Centauros tuvo presencia prácticamente en todo el departamento del Meta, con la imposición de un régimen de terror que se tradujo en una serie de asesinatos selectivos, cobros de vacunas y expropiación de tierras a personas que señalaba de ser guerrilleros o de militar con Martín Llanos, principalmente, en el Piedemonte, en el Ariari, en el área de Mapiripán y en la región Oriental”<sup>10</sup>.

El paramilitarismo logró así debilitar la histórica presencia de la guerrilla.

Tanto la guerrilla como los paramilitares terminaron ejerciendo un control sobre la población civil de acuerdo con sus propios códigos, ante un Estado que no podía recuperar el control del territorio y que incluso era visto por los pobladores con desconfianza por el vínculo de algunos de sus agentes con las fuerzas paramilitares.

Así mismo, estos grupos armados lograron una fuerte incidencia en la vida política de la región buscando la influencia en los ámbitos departamental y municipal, especialmente en alcaldías y concejos. Para los pobladores, los políticos piden el aval político de sus partidos, pero también se ven obligados a pedir el de los actores armados. Y en la vida económica, estos grupos han producido importantes movimientos de capital e invertido recursos, mediante acciones legales e ilegales, para lograr el control de regalías y de la economía de la región, en sus diversas escalas.

10 Vicepresidencia de la República (2008). *Diagnóstico presidencial del Meta*, p. 3.

Los grupos armados, con los recursos de la coca y sus historias de consolidación territorial, han intentado crear órdenes alternativos,

“donde rigen normas que escapan o se oponen al control del Estado y que reclaman para sí la soberanía en sus territorios. Esto es claro por ejemplo en las zonas rurales de Vistahermosa, Puerto Rico, Puerto Concordia y La Macarena donde las FARC aspiran a consolidar una ‘nueva Colombia’ e, igualmente, en una amplia zona de la ribera occidental del Ariari (Puerto Lleras, Puerto Rico, Puerto Concordia) y Guaviare (Mapiripán) donde el Bloque Centauros de las AUC piensa crear un polo de desarrollo con la ejecución de proyectos aerocomerciales y agroindustriales de gran impacto regional. Se tiene, entonces, un complejo contexto donde se yuxtaponen estos ‘órdenes alternativos’ (se enfrentan a través de la guerra y de la ejecución de proyectos de desarrollo) y, al mismo tiempo, se relacionan (negativa o positivamente) con el Estado que hace presencia en las alcaldías, las Fuerzas Armadas y las entidades del orden nacional y departamental”<sup>11</sup>.

Además de la presencia de los grupos armados ilegales en el Meta, hay un hecho político importante en el país y que ayuda en la comprensión de la evolución del departamento: el proceso de descentralización política y especialmente la elección popular de alcaldes, iniciada en el país en 1988, que buscaba que hubiera mucha más presencia estatal y mayor legitimidad del Estado en zonas apartadas de Colombia.

“La descentralización política fue el reto más grande planteado para la clase política del Meta. En última instancia, este proceso implicaba la redistribución del poder político entre los distintos grupos de la sociedad y era algo completamente inédito en los municipios del Ariari y el Duda-Guayabero. Aunque la descentralización fue un proyecto del Estado central y se amparó en instituciones legales, significó también un reacomodo de los factores reales de poder regional, aunque éstos se encontraban al margen de las instituciones”<sup>12</sup>.

Para algunos políticos, este proceso significó la pérdida de poder territorial porque la continuación en una alcaldía ya no dependía de una tradición, sino ahora estaba en manos de la voluntad popular. Para sectores partidistas tradicionales del Meta, la descentralización –con la elección popular de alcaldes– se convirtió en una amenaza para sus intereses, principalmente por la fuerza significativa e histórica que tenía el comunismo en muchos de los municipios del Meta y, además, la de la Unión Patriótica. Este partido, como se mencionó antes, había nacido en 1984 y contaba con unas raíces históricas y una fuerte base social. Tenía el respaldo de su fuerza armada, las FARC, argumento esgrimido por las fuerzas tradicionales del Meta



<sup>11</sup> *Ibidem.*

<sup>12</sup> Gutiérrez, Omar (2005). *Op. cit.*, p. 118.



para oponerse a la reorganización política del departamento. Estos sectores, adicionalmente, estaban preocupados porque la descentralización, sin proponérselo, fue un instrumento para que la guerrilla tuviera mucho más contacto con los alcaldes elegidos popularmente y pudieran ejercer presión o incidencia en sus administraciones.

Así fue como se creó un enfrentamiento entre las facciones partidistas del Meta y el espacio político se convirtió en un espacio de disputa entre los actores armados. Ante los temores de las fuerzas políticas tradicionales, se inició el exterminio de la Unión Patriótica promovido por integrantes de grupos económicos, dirigentes políticos, narcotraficantes, paramilitares y agentes de las Fuerzas Armadas.

“Los años del auge del proceso de descentralización (década del ochenta y noventa) coinciden en el Meta con un periodo de fuerte violencia política municipal en las subregiones del Ariari (El Castillo, Vistahermosa, Lejanías, Mesetas, Granada) y del río Meta (Puerto Gaitán, Puerto López). En contradicción con las expectativas de reforma y modernización del Estado, se produjo un mayor de afianzamiento de los sectores más tradicionales de la política, refractarios a cambios profundos en el ejercicio del poder y la participación electoral. Este hecho frustró también los esfuerzos del primer proceso de paz (emprendido por el presidente Belisario Betancur) para facilitar un proceso democrático de formación y de circulación de élites locales y regionales”<sup>13</sup>.

El proceso de descentralización política iniciado en el país en 1988, como la elección popular de alcaldes, tuvo un especial impacto en Meta

Si bien la descentralización es catalogada como un logro entre las transformaciones políticas de las últimas décadas, fue aprovechada por los grupos armados y por otras fuerzas del Meta para incrementar su poder y evidenció que algunas regiones aún no estaban preparadas para asumir dicho reto.

La debilidad de las instituciones y la falta de recursos impidieron que las administraciones locales asumieran de manera eficiente responsabilidades que les fueron transferidas en temas relacionados con la educación, la salud o la construcción de infraestructura. Por lo demás, la corrupción se convirtió en uno de los primeros obstáculos en el proceso de descentralización.

Partidos políticos tradicionales aprovecharon la situación para controlar o manejar las finanzas públicas, modalidad que también intentaron los paramilitares al llegar a Meta y que ya les funcionaba con eficacia en departamentos del norte de Colombia. La guerrilla, por el contrario, logró otro tipo de control: en aquellas regiones donde tenía una presencia histórica, fue fiscalizadora de las labores de los alcaldes e impusieron –y aún hoy lo hacen–

13 *Ibidem.*

reglas en los municipios, como definir el ingreso o no de productos, la longitud del cabello de los jóvenes o los horarios de las zonas de prostitución.

“En síntesis, la lucha política de estos años no respetó el marco constitucional y los distintos escenarios (legales e ilegales) fueron utilizados por los diferentes actores para enfrentarse. La relación de los oponentes fue tanto una lucha armada militar como un enfrentamiento político para acceder a los gobiernos locales. Para la UP y el Partido Comunista esto encajaba en la fórmula de la ‘combinación de todas las formas de lucha’. Para sus adversarios (partidos políticos, Ejército y narcotraficantes), la lógica de la acción era inversa pero, en muchos sentidos, recíproca y bilateral: intentaba sacarlos del juego político a través del aniquilamiento físico y no distinguía entre los militantes de la UP y los miembros de las FARC. En esta lógica, el recurso de la depuración ideológica devenía como una constante en la historia de la guerra en el Ariari. De nuevo se intentó instaurar zonas homogéneas por su filiación ideológica y ‘unánime’ liberal o comunista”.<sup>14</sup>

## Confluencia de actores

La presencia de guerrilla, de paramilitares, de bandas de narcotraficantes y de grupos partidistas, con múltiples intereses particulares y caracterizados por enfrentamientos políticos y por los recursos económicos, ha terminado por instaurar dinámicas de dominio en la región y de control social, en algunos casos por vías legales y, en otros, violentas, y por sustituir, en muchos casos, los procedimientos democráticos y de participación.

“Estos sectores han conformado redes de poder que, en un juego ambivalente, oponen resistencia al Estado y, al mismo tiempo, intentan hacer parte de él a través de acciones tanto legales como violentas. En toda la amplia zona del sur y el oriente del Meta, la violencia política ha sido una constante en la evolución del Estado local; existe entre ambos fenómenos una estrecha relación histórica. Este es un factor que no puede soslayar ningún estudio ni ninguna propuesta política referida a la superación del conflicto actual. Por consiguiente, es necesario reconocer que tanto los grupos insurgentes como las facciones partidistas y paraestatales han desempeñado un papel clave en la formación del Estado en esta zona”<sup>15</sup>.



<sup>14</sup> *Ibidem*, pág 121.

<sup>15</sup> *Ibidem*, pág 37.

La gobernabilidad del departamento y de los municipios se ha visto afectada por los grupos armados, el narcotráfico y, además, por la corrupción política y de la administración pública, que ha dejado la percepción en el territorio de la existencia de una estrecha relación entre la corrupción y el conflicto armado.

A pesar de los esfuerzos del Estado por garantizar los derechos constitucionales de los habitantes y de aumentar su legitimidad en la región, su debilidad e incapacidad para ser el canal para la resolución pacífica de los conflictos y para garantizar la seguridad se han evidenciado con la violencia política, la corrupción, los antiguos y nuevos enfrentamientos armados y políticos y el aumento de las violaciones de los derechos humanos de la población.

Aunque en los últimos años hay una mayor presencia del Estado, especialmente con el aumento del pie de fuerza y de las acciones militares para debilitar progresivamente a las FARC –con operaciones como el Plan Patriota, Libertad Uno, JM y Emperador–, esto no ha resultado del todo eficiente ante las necesidades de seguridad y de desarrollo de los habitantes, quienes exigen mayor presencia social.

Tampoco ha sido posible que los pobladores superen la incredulidad política y la desconfianza en la institucionalidad, debido a: hechos de corrupción; vínculos entre agentes de las fuerzas militares y actores de poder con paramilitares; la impunidad; la violación y falta de garantías para el ejercicio de sus derechos humanos; y a que la presencia militar, con el recrudecimiento de sus operaciones contra la guerrilla y sus acciones, en vez de llevar la paz a la región ha terminado por aislar a cientos de habitantes en extensas zonas rurales y a aumentar la conflictividad en la región.

A esto se suma la crisis social y económica que enfrentan y que ha sido otro factor de reclamo de la comunidad hacia su Estado, pues no ven mejorar su nivel de vida y tampoco un desarrollo que sea humano.

### 3. Actores locales de paz y sus capacidades de construcción de paz

La dinámica de conflictividad en Meta ha debilitado la organización social y por la paz e impedido que se consoliden procesos sociales y organizativos, a pesar de la fuerza historia del movimiento social.

Los campesinos colonos fueron uno de los núcleos más firmes de los pobladores con una tradición organizativa, expresada en escenarios como las juntas de acción comunal; con un alto grado de legitimidad frente a los habitantes, con un orden comunitario y con una organización estable y metas compartidas, porque compartían un pasado de violencia.

“Durante los años 80 la región se había caracterizado por tener un movimiento campesino muy fuerte, que marchaba paralelo al proceso del fortalecimiento de la Unión Patriótica, como fue el caso de sus logros políticos en las gestas de elección popular de alcaldes; este punto acentuó la persecución y los homicidios, especialmente en las zonas rurales y de colonización, donde más se habían asentado estos liderazgos. Allí fueron especialmente golpeadas las organizaciones sociales de base, como la ANUC y las Juntas de Acción Comunal. Una compleja combinación de élites y fuerzas políticas y criminales, quienes controlaban el poder en la región, fueron ganando terreno y abriendo espacios para que esas voces sociales fueran reemplazadas posteriormente”<sup>16</sup>.

En la época del surgimiento y fortalecimiento de la Unión Patriótica se realizaron importantes marchas motivadas por diferentes preocupaciones. Entre 1984 y 1987, por ejemplo, los colonos se movilizaron para pedir el reconocimiento legal de sus posesiones de tierra en la reserva de La Macarena; la asignación de créditos y apoyos agrícolas; la construcción de una carretera; la desmilitarización de la reserva o para protestar por el asesinato de los líderes de la UP. Una década después, las marchas campesinas en el Ariari –en 1995 y 1996– y el bloqueo de vías de comunicación respondieron a la corrupción administrativa, el desequilibrio en las inversiones sociales en los municipios y la exigencia de que se cumplieran compromisos del Gobierno sobre construcción de escuelas, puentes y vías y el otorgamiento de incentivos agrícolas.

Muchas de estas marchas fueron permitidas o apoyadas por la guerrilla y, sin embargo, los campesinos lograron un grado de autonomía e independencia de las FARC. Si bien la movilización social contribuyó a la consolidación de las organizaciones, también sirvió para que muchos de sus líderes fueran perseguidos, asesinados o estigmatizados.

El recrudecimiento del conflicto terminó por debilitar y fraccionar el movimiento social, mientras que las bases sociales, las más afectadas, se fueron dispersando.

En los últimos 15 años se han dado importantes acciones por la paz lideradas por diferentes sectores, según un seguimiento de la información consignada en Datapaz y la propuesta de estrategias para la paz del director del Cinep, Mauricio García: educar, organizar, actuar políticamente, protestar y resistir.

Según Datapaz, en la década de los 80 y primera parte de los 90 se dio una dinámica irregular en las acciones de los distintos sectores sociales. Entre 1997 y 2000 se registraron los mayores índices del número de acciones por la paz, mientras que en el nuevo milenio se presentó una fuerte disminución.



“Las marchas y concentraciones son los tipos de acciones que predominan en la movilización por la paz en el Meta, las cuales se encuentran ligadas a un fuerte nivel de protesta social contra la violencia, el conflicto armado y la violación de los Derechos Humanos y la infracción al Derecho Internacional Humanitario. El segundo tipo de acción más importante en la región son los encuentros, foros o seminarios, relacionados algunos con situaciones de paz negativa y otros con búsqueda de alternativas para la paz y con procesos de negociación. Son también importantes los procesos de concertación ciudadana, las declaraciones de neutralidad o zona de paz, entre los cuatro tipos de acciones más relevantes”<sup>17</sup>.

La primera estrategia que sobresale entre las formas de acción ciudadana en Meta es la protesta. Se protesta por los asesinatos, las masacres o las desapariciones.

Hubo numerosas protestas, entre ellas, la ‘marcha campesina por la vida y la paz’, realizada entre el 23 y el 25 de septiembre de 1986 en Acacías, organizada por la Unión Patriótica, para rechazar en el departamento la presencia y la acción criminal de los grupos paramilitares; la ‘marcha por la paz y contra la violencia’, del 1º de julio de 1992, para protestar por el asesinato de los alcaldes entrante y saliente del municipio de El Castillo, hecho que movilizó a diferentes sectores del departamento, como la Gobernación, los campesinos, políticos, militares, la Iglesia, los estudiantes, las juntas de acción comunal y las autoridades civiles municipales; y la ‘marcha por la paz’, del 4 de diciembre de 1997, en Granada, en respuesta a la violencia generalizada y la muerte de 20 pobladores en los meses anteriores.

Entre las acciones ciudadanas fueron emblemáticas la marcha del 4 de enero de 1999 en Villavicencio y la ‘marcha del no más’ en el mismo año.

También se protesta por los secuestros y retenciones, hechos que han suscitado una acción permanente entre los diferentes sectores sociales en las dos últimas décadas. Por ejemplo, fueron emblemáticas la marcha en Villavicencio, el 4 de enero de 1999, para pedir por la liberación de una joven secuestrada por las FARC-EP; la ‘marcha del no más’, en 1999, realizada nacional y regionalmente; la marcha de rechazo a la retención de funcionarios del CTI y la Fiscalía en abril de 2000 y la ‘vigilia por la vida y la libertad’ de los familiares de las víctimas, en agosto de 2004.

La población, además, se ha movilizado para protestar por la inseguridad y la violencia generalizadas, con acciones como la ‘marcha por la paz y la convivencia ciudadana’, del 23 de abril de 1998, convocada por los pobladores urbanos de Vistahermosa para pedirles a los grupos armados ilegales que permitieran la realización de las elecciones, que habían

17 Esta parte sobre la movilización por la paz es tomada de un estudio sobre Meta y otras regiones elaborado por PNUD-Cinep-Synergia, en proceso de publicación.

obstaculizado el año anterior; y la 'marcha por el cese al fuego y hostilidades: semillas de paz', del 1º de agosto de 2000 en Puerto Lleras.

Un motivo más de las acciones de protesta son los ataques a la población o a los bienes civiles. Por eso, el 20 de julio de 1997 se realizó en todos los municipios del departamento la 'jornada por la paz contra la violencia guerrillera'; y el 19 de abril de 1997 –y por cinco días– se efectuó la 'marcha de los llaneros por la paz', convocada por la Alcaldía de Villavicencio en rechazo de las acciones de las FARC y para evidenciar los problemas de seguridad que llevaron a la suspensión de la construcción de la carretera Bogotá-Villavicencio.

Otros motivos de protesta son la presencia y las acciones de grupos al margen de la ley y la represión y violación de los derechos humanos, lo que explica la 'marcha de protesta contra la violencia y a favor de la vida', en el municipio de San Juanito, el 29 de marzo de 1998; la 'caravana por el respeto a la vida', del 26 de enero de 2000, cuando por segunda vez 5.000 llaneros se movilizaron para rechazar los secuestros, retenes y pescas milagrosas de la guerrilla en la vía Villavicencio-Bogotá; y la 'Movilización campesina por el respeto a la vida', liderada por los campesinos de El Castillo en rechazo a atropellos de las Fuerzas Armadas.

Una segunda estrategia en el Meta es la de educar para la paz y hacer conciencia de la situación del conflicto en la región, por medio de encuentros, foros, seminarios, campañas o acciones educativas y actos culturales o deportivos. Entre ellos se destacan el II Foro por los Derechos Humanos y la Paz, realizado el 16 de noviembre de 1981 en Villavicencio, con 300 participantes, entre labriegos de diferentes regiones del departamento, personalidades de la vida política y social y ONG, quienes se pronunciaron contra el Gobierno de Julio César Turbay (1978-1982) y su política militarista en la región; y el Primer Encuentro por Alternativas de Paz, realizado el 23 de abril de 1993, en Villavicencio, con organismos de derechos humanos, sindicalistas, organizaciones populares, representantes de la UP y el Partido Comunista, la Consejería de Derechos Humanos y la Iglesia, y sobre las alternativas de paz, la persecución y asesinato de líderes políticos de izquierda y la presencia del paramilitarismo.

Asimismo sobresalen el Primer Encuentro Regional de Convivencia por la Paz, realizado en el municipio El Castillo, el 9 de junio de 1995, para fortalecer el logro de la paz; y la Asamblea por la Paz en el Meta, realizada en Villavicencio el 25 de agosto de 2000 para analizar y plantear salidas a la crítica situación económica, social y de violencia de la región.

Otros foros sobre la paz y los derechos humanos buscaron impulsar acercamientos y crear posibilidades de diálogo con los grupos armados, como el que se cumplió en el municipio de Mesetas, el 29 de abril del año 1992, en el que se nombró una comisión mediadora ante los grupos para buscar propuestas y alternativas para el cese de la violencia; el encuentro del 22 de abril del año 1999, en Mesetas, para analizar las propuestas de paz, la reforma agraria y las garantías para los campesinos en los municipios que comprendían la zona de distensión; y la Cátedra de Paz realizada en el departamento durante el primer semestre de 2000, como continuidad de la campaña nacional del Mandato Ciudadano por la Paz.



La tercera estrategia en el Meta es actuar e incidir políticamente a favor de la paz y la concertación, con acciones como los procesos de concertación y de negociaciones de paz. Tres eventos fueron significativos: el de diciembre de 1998, cuando los municipios El Dorado y El Castillo sellaron la paz poniendo fin a cerca de 50 años de conflicto entre sus pobladores; el del 15 de julio de 2001, con la inauguración del puente de La Reconciliación; y la Mesa de diálogo por la recuperación regional, realizada en Villavicencio el 11 de abril de 2005, un espacio de análisis y concertación sobre los problemas y las posibles soluciones al conflicto armado, tema que aún hoy sigue siendo prioritario en la población.

Una cuarta estrategia es resistir a la violencia y proteger las organizaciones sociales en medio del conflicto mediante actividades como las declaraciones de neutralidad o zonas de paz y las de resistencia civil. Por ejemplo, Villavicencio (en 1997) y el departamento (en 2000) declararon sus territorios como zonas de paz y, en enero de 2000, se realizó el ‘cacerolazo y apagón por la libertad y la paz’, en todo el departamento, con el lema “la luz de la esperanza brilla en nuestras casas a pesar de la violencia”.

La quinta estrategia de movilización es la de organizar y articular los distintos sectores sociales (entidades del Estado, organizaciones sociales, gremios económicos y comunidad internacional) en un proceso que se ha venido fortaleciendo durante los últimos años, a pesar de la violencia política, armada y social, y de las acciones aisladas de los distintos sectores.

Hoy hay importantes procesos organizativos y de articulación, como la Mesa humanitaria del Meta, la Corporación de Desarrollo para la Paz del Piedemonte Oriental (Cordepaz) –que es el Programa de Desarrollo y Paz (PDP) del departamento y actualmente es la coordinadora regional y la operadora del Laboratorio de Paz II de la Unión Europea–; la Coordinación Mesa Meta-Llanos y el Consejo Regional de Empleo.

En estas acciones y movilizaciones por la paz han desempeñado un rol importante las organizaciones sociales; las organizaciones eclesiales –a través de sus oficinas de Pastoral Social–; las organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos humanos; las organizaciones de mujeres –como la Asociación El Meta con Mirada de Mujer y las Mujeres Constructoras de Paz–; el Comité Permanente de Derechos Humanos y el Comité Cívico por los Derechos Humanos, que fueron prácticamente desintegrados ante la persecución y asesinato de sus miembros.

Uno de los mayores logros del territorio ha sido la creación de redes y espacios de articulación social, como la Mesa Humanitaria del Meta y Cordepaz. La Mesa Humanitaria del Meta es un escenario construido por la sociedad civil en el que confluyen distintas iniciativas interesadas en el trabajo por el respeto de los derechos humanos, así como representantes

En el departamento declararon sus territorios como zonas de paz y, en enero de 2000, se realizó el ‘cacerolazo y apagón por la libertad y la paz’.

de las comunidades de diferentes municipios. La Mesa forma actores sociales en el conocimiento de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, así como en la exigibilidad de estos derechos. Además, impulsa la formación y el fortalecimiento de redes sociales, hace visibles las iniciativas de paz, entre otras acciones.

Por su parte, Cordepaz ha sido el escenario creado para orientar los esfuerzos de construcción e implementación colectiva de un programa de desarrollo y paz para el Meta, con presencia de la institucionalidad privada y la sociedad civil, y el apoyo de la cooperación internacional. En ese proceso, Cordepaz ha acompañado a 343 organizaciones sociales de base y comunitarias de dieciocho municipios en su interlocución e incidencia en políticas públicas de paz y desarrollo.

Es necesario resaltar la evolución del proceso organizativo de las mujeres del Meta, que se ha ido consolidando en el departamento hasta convertirse en una amplia red en defensa de los derechos de la mujer y, al mismo tiempo, de los derechos de las víctimas en general.

Ellas han liderado procesos para contribuir en la educación de los niños y niñas de las comunidades, para la formación y capacitación de las mujeres en diferentes actividades, para la recolección de fondos que les permitan enfrentar situaciones particulares y para la promoción e impulso de proyectos productivos.

Las mujeres y sus organizaciones han tenido una dinámica especial en la construcción de la paz a través de iniciativas y procesos a través de los cuales han logrado la articulación de lideresas de diversos municipios, la conformación de mesas de coordinación y el impulso a empresas productivas, capacitaciones y encuentros nacionales.

La iniciativa Meta con Mirada de Mujer, por ejemplo, que se vinculó a la Mesa Humanitaria del Meta, es un ejemplo de esfuerzos significativos que, junto con la Red de Mujeres y Organizaciones del Meta, tiene como fines promover y defender los derechos de las mujeres, en especial las campesinas, indígenas y las que están en situación de desplazamiento. También pretenden promover la equidad de género; la participación y representación de las mujeres y sus organizaciones en los ámbitos municipal, departamental y nacional; garantizar sus derechos económicos, sociales y culturales; generar procesos que para que se apropien de sus derechos sexuales y reproductivos y prevenir y erradicar la violencia basada en género.

El campesinado en el Meta es otro de los actores tradicionales, la mayoría articulados en entidades como la ANUC, y con diferentes iniciativas, como las que lideran comunidades campesinas desplazadas y las que se han mencionado, entre otras.

En la última década, el sector juvenil se ha convertido en un actor dinámico de la región en el impulso de iniciativas de paz, así como algunas ONG nacionales e internacionales que han hecho presencia trabajando en diferentes ámbitos.

La institucionalidad –municipal, departamental– también ha promovido iniciativas a favor de la paz. La Gobernación del Meta y algunas alcaldías municipales han convocado, liderado y participado en marchas y encuentros por la paz. La Asociación de Municipios





del Ariari lideró en su momento procesos de reconciliación y desarrollo, lo que llevó a que recibiera el Premio Nacional de Paz en 2002.

Sin embargo, en los últimos años la institucionalidad ha perdido credibilidad e interlocución con la sociedad civil y los movimientos por la paz ante la violencia de algunos agentes del Estado contra la población civil, por la corrupción administrativa que ha llevado a la cárcel a reconocidos mandatarios y, además, por las relaciones entre funcionarios y paramilitares. Otro factor que ha incidido en contra de estas acciones por la paz es el peso que el conflicto armado y sus actores –guerrilla, paramilitares y narcotraficantes– ha tenido en la dinámica política, mediante la amenaza, la presión o el impedimento de la función pública.

Para la institucionalidad –y también para la sociedad civil– hay una fuerte polarización en la región que se observa, según señalan la Gobernación, algunas alcaldías municipales y entidades del Estado, por posiciones sesgadas de líderes en algunos escenarios sociales; por la ausencia de denuncias contra las acciones de la guerrilla, lo que le ha restado credibilidad, y por la defensa de intereses personales y políticos, no comunitarios.

Las diferencias han hecho que se estén creando redes sociales, apoyadas por la institucionalidad, que no tienen mayor articulación con escenarios ya existentes.

En la actualidad, según un censo realizado por la Oficina de Paz de la Gobernación del Meta, hay 8.000 organizaciones que funcionan en el Meta, muchas de ellas trabajando en temas relacionados con la paz, el desarrollo, la reconciliación y los derechos humanos.

Algunas de ellas han logrado una importante representación social, tienen reconocimiento en el departamento y entre las organizaciones, y capacidad de incidencia, aunque aún son débiles, han sido diezmadas a causa del conflicto y no cuentan con muchos aliados de carácter nacional. De todas formas, hay una importante infraestructura social para el desarrollo y la paz.

La cooperación internacional ha sido otro actor que ha aumentado su presencia en la región en los últimos años y cumplido un papel importante, trabajando por la defensa y garantía de los derechos humanos, por el desarrollo, y por el fortalecimiento y empoderamiento de las organizaciones y procesos sociales, buscando la articulación entre los diferentes actores.

En cuanto a Naciones Unidas, hay varias agencias y programas con una intervención diversa. PNUD, ACNUR, OIM y UNFPA tienen sede en el terreno, lo que ha facilitado su labor y el impulso a procesos de largo plazo. Es importante señalar que el ingreso de ACNUR y UNFPA se ha dado con la plena colaboración de la plataforma REDES-PNUD.

Otras oficinas y fondos de Naciones Unidas intervienen de diferentes formas. Así, por ejemplo, OACNUDH hace presencia en el Meta a través de oficinas ubicadas en otras re-

El proceso organizativo de las mujeres del Meta se ha ido consolidando hasta convertirse en una amplia red en defensa de sus derechos y los de las víctimas.

giones del sur del país, mientras que Unifem trabaja en articulación con el PNUD gracias a un convenio firmado entre las dos partes. Asimismo, hay un trabajo interagencial (PNUD-Unifem-Acnur-UNFPA) en diferentes temas, entre ellos el de género. PMA, OCHA y Unicef también han impulsando proyectos en el territorio, según los temas de sus competencias.

De la misma manera, ha habido una acción importante de la Unión Europea en el Meta por medio de sus laboratorios de paz. El actual corresponde al número III, cuya entidad coordinadora regional es Cordepaz.

En el mismo sentido, al Meta han llegado otros organismos internacionales como la Cruz Roja Internacional y Médicos sin Fronteras, que han promovido y apoyado iniciativas específicas.

## 4. Situación actual y dinámicas

### Situación social

La situación de pobreza en el Meta, que afecta en particular a los grupos étnicos, las mujeres y la niñez, muestra los altos grados de inequidad, que se reflejan en las posibilidades de acceso y goce de los derechos a la educación, la salud, el empleo y la vivienda, entre otros.

En este marco, durante las últimas décadas en el Meta han germinado y se han fortalecido movimientos y organizaciones de sectores afrocolombianos, indígenas, campesinos, jóvenes, de mujeres y, recientemente, de población desplazada, quienes han contado con precarios apoyos y fuertes presiones y persecuciones en razón de sus actividades para exigir sus derechos.

“Meta registra un gran porcentaje de población pobre, asentada en su mayoría en el área rural, y la población indigente asciende al 11,2%, que son cerca de 82.000 personas. Según el DANE, el porcentaje de NBI del departamento (2005) corresponde al 24,8%, frente a un 27,3 del país”. En 1993, el porcentaje fue del 41,34%, según la publicación de la Gobernación *Meta, situación socioeconómica del departamento 2008*, de julio de 2009.

Algunos de los indicadores más actualizados sobre el departamento evidencian los retos que hoy persisten para la satisfacción de necesidades básicas de los pobladores, según la publicación de la Gobernación:

- ▶ Meta registra un déficit de vivienda total del 37,07% (el 14,04% de los hogares necesitan una nueva vivienda para su alojamiento y el 23,03% habitan en viviendas susceptibles a ser mejoradas).
- ▶ Al evaluar 20 municipios del Meta (en 2006) para determinar el índice de riesgo de calidad del agua (análisis de agua destinada al consumo humano de la población) el



Meta fue considerado como uno de los casos críticos por su alto riesgo de no acceso a agua potable (de 65%), frente al 28,7% del promedio nacional.

- ▶ El acceso al servicio de acueducto en el departamento presenta una cobertura general del 86%, con 13 horas de promedio día de servicio. En cuanto al servicio de alcantarillado, su cobertura promedio en el área urbana es del 84%.
- ▶ “De acuerdo con el Censo 2005, el 39,1% de la población residente en Meta ha alcanzado el nivel básica primaria y el 32,6% secundaria; el 5,9% ha alcanzado el nivel profesional y el 0,9% ha realizado estudios de especialización, maestría o doctorado. La población residente sin ningún nivel educativo es el 10,3%”.
- ▶ “La Secretaría de Educación durante la elaboración del Plan de Desarrollo Departamental Unidos Gana el Meta 2008- 2011, informó que se encuentran fuera del sistema educativo: el 10% (3.628 hab.) de la población en edad escolar de primaria; el 20% (1.508 hab.) de niños y niñas en edad de preescolar; el 47% de habitantes en edad escolar (14.666 hab.) para el nivel secundaria; el 63% (12.872) de jóvenes en edad escolar de media”. En materia de deserción “se presentan niveles altos en los municipios de Vistahermosa, San Juan Arama, Puerto Rico, Puerto Concordia, Fuentedeoro, Castilla la Nueva, y Barranca de Upía; y en traslado, el 32% de los municipios presentan un alto índice, en los municipios de Barranca de Upía, Mapiripán, Puerto Lleras, y Vistahermosa”.
- ▶ Meta tiene el 78% de sus alumnos matriculados en la zona urbana y el 22% en el área rural, porcentajes departamentales muy parecidos a los nacionales.
- ▶ Según la Cámara de Comercio de Villavicencio, en 2006 se matricularon 25.612 empresas, de las cuales 22.061 eran de personas naturales y 2.551 de sociedades. El 96,88% son microempresas, y solo se registraron 43 empresas como grandes.

Las coberturas en servicios públicos se encuentran en niveles inferiores a los nacionales, aún cuando se reciben recursos importantes por regalías.

Indicadores sobre la situación social del Meta (recuadro 1) y el estudio de la propia Gobernación advierten que,

“las coberturas del departamento en servicios públicos se encuentran en niveles inferiores, aún cuando se recibe recursos importantes por regalías y que por disposición del Decreto 416 de 2007, el 60% de estos recursos deben ser destinados a mantener e incrementar las coberturas en agua potable, alcantarillado, educación, salud y mortalidad infantil; y que en el marco del objetivo 7 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la meta 10 tiene como finalidad reducir a la mitad para 2015 el porcentaje de personas que carecen de acceso sostenible al agua potable y al saneamiento básico”.

## Recuadro 1. INDICADORES SOCIALES

Pobreza	Se ha avanzado en la reducción de la pobreza e indigencia con respecto a la nación. La línea de pobreza para 2005 fue del 44,8% (43,9 en 2004 y 45,9 en 2003) y la línea de indigencia fue del 12,21% en 2005 (11,43 en 2004 y 13,16 en 2003).
Educación (analfabetismo)	Existe una tendencia decreciente en la tasa de analfabetismo en los últimos diez años. En 2005 fue de 2,7% (2,3% en 2003).
Empleo	El empleo se está recuperando de la crisis de 1999-2000 y avanza más que el promedio nacional.
Género	En 2005, el 13,1% de las mujeres han percibido violencia física por parte de su pareja y el 11,6%, violencia sexual.
Mortalidad infantil	Existe una tendencia a la reducción de la mortalidad infantil. La tasa de mortalidad infantil de menores de un año fue de 16,1 por cada 1.000 nacidos vivos en 2006 y de 15,9 en 2005. La tasa en menores de cinco años fue de 24,1 por 1.000 nacidos vivos en 2006 y de 19,2 en 2005.
Salud sexual y reproductiva	Para 2005, el DANE reportó 81,6 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos, casi el doble de la meta de los ODM para el año 2015, que es de 45. En el 2005, el 0,30% de las adolescentes estaba en embarazo y el 0,68% usó métodos modernos de anticoncepción.

Fuente: Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) - Meta. PNUD.

Meta es uno de los departamentos del país que más recursos por regalías recibe, aunque ello no se ha reflejado en el desarrollo de sus pobladores, por el nivel de corrupción y la mala administración de las entidades.

Las *mujeres* constituyen un grupo social históricamente vulnerado y afectado en sus derechos por el conflicto y las políticas sociales que invisibilizan los enfoques afirmativo, diferenciales y de reivindicación de sus derechos. La población total del Meta proyectada para 2009 era de 853.115 pobladores, de los cuales 210.044 son mujeres, es decir, el 24,6% del total.

El estudio de la Gobernación reveló que la unión libre predomina en el departamento con un 69,3%, lo cual puede tener un efecto negativo debido a la poca estabilidad de estas uniones y que el nivel de escolaridad de las mujeres con hijos, durante 2006, es de secundaria, tanto completo como incompleto (58,4%).

Sobre los jóvenes, la población menor de 18 años corresponde al 36,69% del total de los habitantes del Meta. Es decir, hay 313.002 menores de 18 años, de los cuales 159.389 (18,68%) son hombres y 153.613 mujeres (18%), con respecto a la población total. En este grupo poblacional se concentran problemas de exclusión, falta de oportunidades y es en el que también se está reproduciendo la pobreza. Muchos de ellos están marginados de la ciencia y la tecnología, de las posibilidades de trabajo, la participación política, la recreación y las posibilidades de expresión.



Con relación a los pueblos indígenas, hay 8.398 indígenas en el departamento, según el censo del DANE - 2005, 3.440 se ubican entre los 0 y 19 años (1.859 hombres y 1.581 mujeres), es decir, el 40,96% de la población total. Estas comunidades indígenas están distribuidas en 20 resguardos, 3 cabildos y 4 asentamientos ubicados en los municipios de Granada, La Macarena, Mapiripán, Mesetas, Puerto Concordia, Puerto Gaitán, Puerto López, Uribe y Villavicencio; correspondientes a las etnias sikuani, piapoco, achagua, saliba, guayabero, guanano, paez, emberakatio, witoto, inga, tucano, curipacos, cubeo y siriano.

La mayoría de estas comunidades sigue viviendo una situación preocupante por los niveles de pobreza y de indigencia, situación que se agudiza a causa de los constantes combates y presencia de miembros de grupos armados.

Un panorama parecido enfrentan los afrocolombianos, que son el 2,51% del total de la población del Meta, que debieron migrar para ocupar extensas zonas de la Amazonia en los departamentos de Putumayo, Caquetá y Meta, debido a la producción de oro, madera y petróleo. La pobreza, la falta de oportunidades y la invisibilidad de los problemas que enfrentan se han convertido en las principales causas de su exclusión social.

La situación social del Meta se ha visto afectada, según la Defensoría del Pueblo del Meta y la Personería de Villavicencio, por un aumento progresivo en el desplazamiento interno hacia la capital departamental y, al mismo tiempo, por el reclutamiento forzado de niños, niñas y jóvenes.

Otra situación preocupante en el Meta es la violencia intrafamiliar. En Colombia, en la última década, ha ido en ascenso, especialmente a partir de 2004, y se representa en su mayoría por la violencia de pareja, que en 2009 fue del 65%, seguida de la violencia entre otros familiares (18%), violencia infantil (15%) y, por último, violencia contra el adulto mayor (2%), según el informe forense de 2009 del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

En todas las expresiones de la violencia intrafamiliar, en el ámbito nacional las mujeres fueron las víctimas más frecuentes, con un incremento considerable en la violencia de pareja. Según las estadísticas, la violencia intrafamiliar ocupó el segundo lugar entre todas las lesiones no fatales, con el 31% en 2009, lo que revela a la institución familiar como uno de los principales escenarios en los que la violencia cobra importancia. “Datos preocupantes, teniendo en cuenta que el espacio familiar es el marco referencial de cualquier persona en el momento de resolver un conflicto”, dice el informe.

En el caso del Meta, la situación ha mejorado si se comparan los años 2008 y 2009, ya que se registró un descenso en todos los indicadores: violencia de pareja, maltrato infantil y violencia entre otros familiares (cuadro 1). Sin embargo, en los dos años la tasa es muy superior a la nacional.

Cuadro 1. CASOS Y TASA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR						
		Violencia de pareja	Maltrato infantil	Violencia entre otros familiares	Total	Tasa
Meta	2008	1.448	686	410	2.544	300
	2009	1.427	505	370	2.302	270
Colombia	2008	58.533	13.523	17.747	89.803	202
	2009	61.139	14.094	18.629	93.859	209

Fuente: Forensis 2009, Instituto Colombiano de Medicina Legal.

## Situación económica

Meta ha sido, históricamente, un departamento en esencia ganadero y agrícola, que en las últimas décadas ha enfrentado grandes diferencias entre las economías campesinas de subsistencia y las economías agroindustriales y de ganaderías extensivas, la concentración de la tierra y el poder y la explotación de los recursos naturales basada en modelos extractivos. La riqueza en recursos naturales, como el petróleo, ha ayudado a definir el carácter económico de la región y también ha desempeñado un rol principal en las importantes extensiones de cultivo de hoja de coca que hay en Meta y otros departamentos del sur del país.

Según la publicación de la Gobernación Meta, situación socioeconómica del departamento 2008, de julio de 2009, los estudios del DANE demuestran que,

“la evolución de la economía del departamento del Meta ha presentado un crecimiento positivo y sostenido a lo largo de la serie de tiempo 200-2007 y explicada principalmente por el dinamismo de las cuentas económicas como servicios comunales, sociales y personales, agricultura, ganadería, pesca y silvicultura y construcción y obras públicas. Según las cifras registradas a precios constantes, en el 2007 tuvo un ingreso bruto agregado de \$5.002.095 millones. Cifra que al año 2000 representó un crecimiento aproximado de 27,38%, lo cual equivale un incremento de \$1.075 millones respecto a ese año”.

La información de la Gobernación muestra que, al inicio de la década, las tasas de crecimiento fueron bastante bajas, mientras que a partir de 2004 se da un crecimiento progresivo (cuadro 2).



**Cuadro 2. TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB DE META, VARIACIÓN ANUAL**

2000-01	0,48
2001-02	1,35
2002-03	2,85
2003-04	1,52
2004-05	5,39
2005-06	6,90
2006-07	6,34

Fuente: DANE.

Las ramas de actividad económica con mayor participación en el producto interno bruto departamental (PIBD) para 2007 siguió siendo el petróleo crudo, el gas natural y la explotación de los minerales uranio y torio, con el 15,61% del total del PIBD, seguido del comercio (11,07%), otros productos agrícolas (8,68%), trabajos de construcción de obras civiles (8,58%) y la administración pública (8,04%).

Para 2008, Meta se había convertido en el mayor productor de petróleo del país, por encima de Casanare y Arauca. Meta, con el 28% de la producción nacional, y Casanare, con el 21%, registran el 49% de la producción de crudo en Colombia. Según el Ministerio de Minas y Energía, la producción diaria del Meta pasó de 122.435 barriles promedio diario, en 2007, a 168.263 barriles promedio diario, en 2008, especialmente por los pozos de Puerto Gaitán (con el 68% del total producido por el departamento), Acacias (con 15%), Castilla La Nueva (con 11%) y Villavicencio (con 6%). También se destacan por su producción los campos de Apiay, Chichimene, Castilla Norte y Guayuriba.

“Mientras la producción en Arauca y Casanare se encuentra estable, el Meta ha presentado un aumento significativo desde el año 2003, debido al interés por parte de las petroleras en crudos pesados. Esta tendencia podría elevarse sustancialmente en los próximos años gracias a los nuevos hallazgos e inversiones realizadas por empresas como la Metapetroleum, Petrobras, entre otras, que en compañía con Ecopetrol permitirán aumentar la producción y la de los pozos Castilla y Rubiales, consolidando al Meta en primer lugar de producción de crudo y posiblemente el primero lugar en captación por regalías”<sup>18</sup>.

Casanare, Arauca y Meta reciben el 41,5% de las regalías del país, lo que evidencia, según la Gobernación del Meta, “la riqueza de la región Orinoquia”. Efectivamente, entre 2002

18 Gobernación del Meta (2009). Meta, situación socioeconómica del departamento 2008 (julio)..

y 2009, Meta recibió un total de 6,06 billones de pesos por regalías directas e indirectas y por el Sistema general de participaciones (SGP) o transferencias, según un informe del Departamento Nacional de Planeación<sup>19</sup>, recursos que son adicionales y diferentes a las inversiones del presupuesto general de la Nación.

Por regalías directas e indirectas, 14 de los 30 municipios del Meta recibieron, durante las vigencias 2002 a 2009, 3,05 billones de pesos, de los cuales el 99,5% corresponden a regalías directas provenientes de la explotación de hidrocarburos, metales preciosos y sal. “En la vigencia 2002 recibió por regalías directas 165 mil 853 millones de pesos, mientras que en 2009 contó con giros por 487 mil 294 millones de pesos, hecho que representa un crecimiento de 194 por ciento, convirtiéndolo en uno de los departamentos que más recibe este tipo de recursos”<sup>20</sup> (cuadro 3).

Cuadro 3. REGALÍAS RECIBIDAS (Millones de pesos)				
	2006	2007	2008	A junio 2009
META	\$366.812,8	\$359.024,3	\$671.684,9	\$487.294,0

Fuente: Agencia Nacional de Hidrocarburos, Ministerio de Minas y Energía.

Las regalías han estado en la mira no solo de los armados –guerrilla y paramilitares que han intentado incidir en su uso–, sino también de las fuerzas legales y de autoridades locales que han sido investigadas por la apropiación de las mismas o por su uso indebido.

La riqueza petrolera del Meta ha hecho que en las últimas décadas hayan llegado al territorio numerosas compañías internacionales interesadas en la explotación del crudo. Esto responde no solo a la política nacional de traer nuevos inversionistas, sino también a la preocupación en el mundo por el volumen creciente de demanda de combustibles derivados del petróleo.

Dicha explotación y la presencia de grandes inversionistas han generado fuertes controversias por el impacto social en las poblaciones, como ha ocurrido en otras regiones del país. Comunidades indígenas se siguen pronunciando por la explotación de sus territorios sin que se cumpla con la consulta previa que exige la Constitución.

## Ganadería extensiva, desarrollo agrícola y el problema de la tierra

El Meta conserva su histórica vocación de ganadería extensiva, gracias a su gran dimensión y características físicas. En el ámbito nacional, es el departamento con mayor cantidad

<sup>19</sup> *Ibidem*

<sup>20</sup> *Ibidem*





de ganado, 95% para su consumo, seguido por Córdoba y Casanare, según la Encuesta Nacional Agropecuaria y la Secretaría de Agricultura del Meta. En el 2008 continuó siendo el mayor productor de carne vacuna que se consume en Bogotá, con una participación del 40,03%. El 66,62% de la carne que sirve de alimento en la capital provienen de Meta y Casanare<sup>21</sup>.

**Cuadro 4. DISTRIBUCIÓN DEL USO DEL SUELO EN META, 2008**

Actividad	Hectáreas
Ganadería	2'636.403
Agricultura	289.74 5
Bosques y parques	2'832.343
Bosques artificiales y caucho	8.000
Otros usos	2'797.009
<b>TOTAL</b>	<b>8'563.500</b>

Fuente: Secretaría de Agricultura Departamental.

Al comparar el uso del suelo del departamento en 2008 y las diferencias entre los sistemas productivos ganadero y agrícola (cuadro 4), la ganadería continúa siendo la prioridad.

En la última década, se ha ido dando una fuerte transformación de la estructura económica de la región, especialmente en relación con el uso del suelo para la siembra de cultivos para la producción de biocombustibles.

El sector agrícola del Meta, tradicionalmente, se ha caracterizado por la diversidad de producción en arroz, maíz, soya y algodón, entre otros. En los últimos años se ha dado un incremento en la producción de estos cultivos, llamados transitorios, en especial del arroz. El departamento continúa siendo el mayor productor de soya del país.

También son tradicionales cultivos semipermanentes, como los de yuca, plátano, caña panelera, maracuyá, papaya, piña, lulo, mora, arazá y sagu. El 85% del plátano que consume el centro del país sale del Meta. Mientras la producción de piña, por ejemplo, aumentó en 2008 con relación a 2007, la de lulo, mora, araza y maracuyá disminuyó su área y producción con respecto a años anteriores.

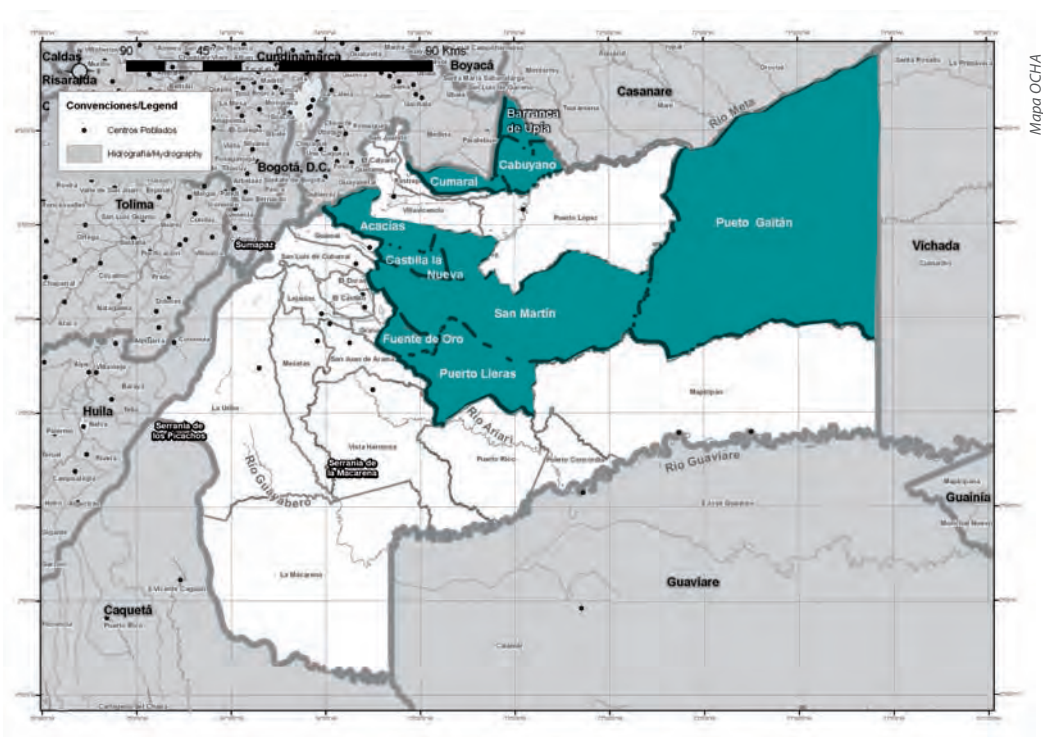
La caña panelera también ha aumentado en los últimos años por el incremento de trapiches locales en municipios como Vistahermosa, Uribe, Mesetas, Macarena y San Juan de

21 *Ibídem.*

## Los 10 municipios del Meta con el mayor número de hectáreas de palma y el desplazamiento 200

Vistahermosa	2.553
Mapiripán	1.599
Puerto Rico 1.131	227,39
La Macarena	697
Mesetas	592
Puerto Concordia	452
Villavo	416
Uribe	390
Puerto Lleras	142,42
Puerto López	340
San Martín	314

Fuente Vicepresidencia de la República.



Arama. Puerto López, Mesetas y Lejanías son los municipios con mayor área sembrada de caña panelera. Según la Gobernación, se busca que la altillanura de Puerto López y Puerto Gaitán sea el centro principal de cultivos de caña para la futura producción de etanol, es decir, con fines de biocombustibles.

En los últimos años se ha dado un incremento de otro tipo de cultivos, los permanentes, que son la palma de aceite, el caucho, el café, los cítricos, el aguacate y el durazno. Estos cultivos crecieron el 14,8% en 2008, con respecto al 2007, pero fue la palma de aceite el cultivo que más aportó a dicho crecimiento, con el 71,7%, seguido por el de caucho y los cítricos. Con relación a las hectáreas sembradas, la palma tiene el mayor número, cultivadas de una manera progresiva desde 2006 a 2008 (cuadro 5).

**Cuadro 5. TOTAL CULTIVOS PERMANENTES 2006-2008 (Palma, caucho, café, cítricos, aguacate y durazno)**

Producto	2006		2007		2008	
	Hectárea	Producción	Hectárea	Producción	Hectárea	Producción
Palma	97.137	220.023	97.500	222.000	111.808	276.402
Otros	8.976	149.480	13.831	150.495	16.111	135.477
<b>TOTAL</b>	<b>106.113</b>	<b>369.503</b>	<b>111.331</b>	<b>372.495</b>	<b>127.919</b>	<b>411.879</b>

Fuente: Secretaría de Agricultura del Meta.

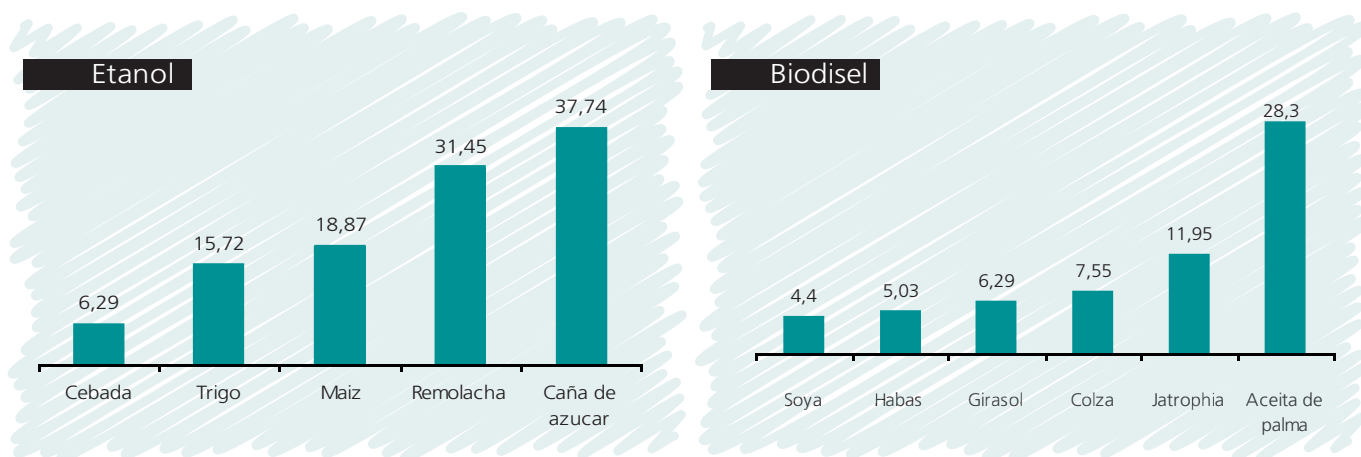
“La palma de aceite ocupa el primer lugar y en Colombia es el tercer cultivo en importancia. En el departamento del Meta, este cultivo continuó experimentó importantes dinámicas de crecimiento en área de siembra y producción derivado de los fuertes incentivos Gubernamentales y las oportunidades actuales de apertura de nuevos mercados industriales como la producción de biocombustibles. En Colombia se registraron incrementos significativos de las áreas sembradas en departamentos como Santander, Meta, Norte de Santander y Nariño. El principal departamento productor de palma de aceite fue el Meta abarcando cerca del 32% del área sembrada en el 2008, lo siguió Santander y Cesar”<sup>22</sup>.

El municipio de San Carlos de Guaroa es el de mayor extensión en cultivos de palma de aceite en el departamento (30.000 hectáreas), pero sobresalen también San Martín y Acacías.

La producción de caucho también ha ido en aumento, en especial en Puerto López y Puerto Gaitán, donde se concentra el 82% del área sembrada del departamento. Según la Secretaría de Agricultura del departamento, para el año 2015 se espera llegar a 20.000 hectáreas, de las cuales el 70% estaría en estos municipios.

“Nuestra posición geográfica nos ubica en la zona tropical, con 250 a 300 metros sobre el nivel del mar, con registros pluviométrico en la Altillanura entre 2.300 y 2.600 mm por año y excelente radiación solar, donde se pueden establecer los cultivos con excelentes condiciones ambientales para lograr una máxima productividad y competitividad en Biocombustibles, como son la Palma de Aceite para obtención de Biodiesel y la Caña de Azúcar para la producción de Etanol, como lo demuestra [el siguiente gráfico].

### Barriles de biocombustibles por hectáreas por año



Fuente: Worldwatch Institute. Cálculos Coordinación Nacional para el Desarrollo Sostenible de los Biocombustibles en Colombia

Considerando la información del gráfico, la apuesta regional se ha orientado hacia la ampliación de las áreas sembradas con Palma de Aceite y la iniciación de siembras en sabanas de la Altillanura de cultivos de Caña de Azúcar. En estas condiciones el programa encuentra un fortalecido Cultivo de Palma de Aceite, en una región de tradición palmicultora, con 121.135 Has. sembradas hasta el 2008, 73.558 Has. en producción y 47.577 Has. en desarrollo, donde se recolectaron 227.000 Ton. al año de Aceite de Palma, según cifras de Fedepalma y por lo tanto una amplia experiencia en el tema. En 2009, el área de siembra se está incrementando en forma significativa<sup>23</sup>.

Según el estudio de la Gobernación, teniendo en cuenta las recomendaciones técnicas y estudios que realiza la empresa privada, existen más de cuatro millones de hectáreas con posibilidades de cultivos de caña de azúcar, clave para la producción del etanol.

En la actualidad, se siembran 11.000 hectáreas de caña de azúcar entre los municipios de Puerto López y Puerto Gaitán, que iniciará producción de 350.000 litros diarios de etanol en 2011 o 2012. También se siembran 2.000 hectáreas de yuca amarga en el municipio de Puerto López, que producirán 20.000 litros diarios de etanol.

“El Gobierno del departamento del Meta, concededor de las grandes posibilidades de la región en la producción de energías renovables, por intermedio de la Secretaría de Agricultura, ha creado la primera cadena regional de biocombustibles de Colombia, con el fin de hacer un acompañamiento a todos los eslabones comprometidos en la producción agrícola, industrialización y comercialización de etanol y de biodiesel, en los programas que hoy se desarrollan y a los proyectos trazados hacia el futuro. Actualmente las secretarías de Agricultura y de Planeación del Meta tienen firmados Convenios con empresas dedicadas a producción de biocombustibles en Brasil, aprovechando la fortaleza que ellos tienen en experiencias por más de 40 años en el tema y la similitud de las condiciones del Cerrado Brasileiro con las de nuestra región. Los objetivos primordiales de la cadena de biocombustibles son: conocimiento real de las posibilidades regionales, generación de empleo rural, desarrollo agroindustrial y sostenibilidad ambiental<sup>24</sup>.

Para las organizaciones campesinas y sociales, este auge en cultivos como la palma ha significado un nuevo modelo de desarrollo en el que prima la explotación de la tierra, no para la agricultura tradicional y el desarrollo del campo sino para la producción de los biocombustibles. Adicionalmente, consideran que en este negocio los grandes beneficios no son para el campesinado sino, por el contrario, para los empresarios, las empresas y las compañías internacionales.

23 *Ibidem.*

24 *Ibidem.*



Otra de las grandes preocupaciones es que la siembra de esos cultivos ha estado relacionada con una violencia creciente y, en consecuencia, produce el despojo de tierras de los campesinos, quienes en muchos casos se han visto obligados a vender y ver posteriormente sus hectáreas sembradas de palma.

Como lo dicen algunas autoridades en la región,

“es necesario tener mucha claridad del por qué y para qué se quiere la recuperación de La Macarena. Hay que saber si detrás de ello se busca que otros aprovechen las riquezas y las extensiones de hectáreas que se están cultivando de palma porque estos no son negocios de los campesinos, sino de quienes pueden económicamente cultivar y esperar”<sup>25</sup>.

Para los gobernantes, estas plantaciones de palma han abierto importantes oportunidades laborales para el campesinado, cuentan con el apoyo del Gobierno y son el resultado de la seguridad en la región. Por eso, autoridades de diferentes municipios están desarrollando o tienen proyectos dirigidos a ampliar este tipo de cultivos.

Sin embargo, hay varios interrogantes: para este tipo de cultivos se requieren como mínimo cinco hectáreas, cantidad que, en general, un campesino no tiene; quien cultiva debe tener los recursos suficientes para su sostenibilidad durante cuatro o cinco años, tiempo en el cual se da la primera producción de la palma; se está observando “un aumento exagerado de los precios de la tierra. Si antes una hectárea de tierra costaba en Puerto Rico 300.000 pesos, hoy cuesta entre 2 y 5 millones” y el problema es que detrás del gran comprador no hay un mecanismo de planeación para el vendedor. Adicionalmente, para estos tipos de cultivos se requiere poca mano de obra, lo que significa agudizar el problema del campesinado, y para preparar la tierra para estos cultivos hay que tumbar mucha vegetación y ecosistemas, lo cual tiene un efecto directo en la biodiversidad del Meta.

Estos cultivos no han estado exentos de polémicas, como la generada en el ámbito nacional y la región cuando se conoció (10 de febrero de 2008) la decisión del Gobierno de ceder el predio Carimagua –de 17.000 hectáreas–, ubicado en el Meta, a cultivadores de palma, por un término de 50 años, pese a que dicha entrega se le había prometido a decenas de familias desplazadas por la violencia. Después de la exigencia de la Procuraduría de revisar la mencionada orden y de un estudio hecho por una comisión de expertos designada por el Gobierno, este determinó (15 mayo de 2008) que campesinos y empresarios desarrollaran allí proyectos que beneficiarán a 500 familias.

Este modelo de desarrollo alrededor de los biocombustibles ha terminado por agudizar el problema de la tierra, cuya distribución y tenencia ha sido una exigencia histórica de

25 Juan Gildardo Largo, concejal de Vistahermosa.

Hay un aumento exagerado de los precios de la tierra. Si antes una hectárea costaba 300 mil pesos en Puerto Rico, hoy cuesta entre 2 y 5 millones.

campesinos y organizaciones sociales. A esto se suman los graves problemas en la titulación de las tierras de los colonos, que ha hecho que para muchos campesinos sea casi imposible demostrar la pertenencia de sus propiedades.

Según la Comisión de Seguimiento a las Políticas Públicas sobre el Desplazamiento Forzado, el 34,5% de los predios que han sido abandonados o despojados en Colombia están ubicados en la región Pacífica, la Orinoquia y la Amazonia. Los departamentos más afectados son Meta, así como Chocó, Nariño, Putumayo, Caquetá, Arauca, Vichada y Casanare. El informe advierte que municipios como Vistahermosa tienen numerosas solicitudes de protección de tierras, 325 en total.

“... existen problemas de definición de los títulos de propiedad para otorgar a los colonos y campesinos un capital mínimo que les permita participar en los circuitos económicos lícitos o al menos que les permita una acumulación primaria de capital para establecer una relación dentro de la legalidad con el Estado. En efecto, el programa de titulación de parcelas campesinas ha encontrado los mayores obstáculos institucionales y normativos y, en consecuencia, no ha dado sus primeros pasos, a pesar de los esfuerzos emprendidos por el CCAI. Los obstáculos encontrados son de dos tipos: uno, la falta de claridad sobre la delimitación de las áreas protegidas de los tres parques naturales que existen en el área (Tinigua, Los Picachos y Macarena). Dos, la incapacidad y falta de voluntad política del Incoder y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para realizar las tareas necesarias para la adjudicación, que, además, tiene un marco normativo atrasado e ineficaz”<sup>26</sup>.

Para líderes comunitarios de la región, algunos de los interesados en sus tierras tienen nombre propio: los paramilitares Pedro Guerrero, alias *Cuchillo*, y Daniel Barrera, alias *El loco Barrera*.

Se teme que el Plan de Consolidación de La Macarena con sus estrategias militares y de inversión social termine por beneficiar no precisamente a los campesinos;

“El resultado de esta lógica de intervención ha sido que a pesar de los beneficios obtenidos en oferta de seguridad, muchos colonos y campesinos abandonan la zona en busca de nuevas tierras, oportunidades económicas o simplemente son desplazados por los nuevos inversionistas que al final de cuentas terminan siendo los grandes beneficiarios de la consolidación del Estado. La falta de decisión del Ministerio de Agricultura y del Incoder para formalizar los derechos de propiedad en La Macarena



26 “El Plan consolidación de la Macarena”, policy paper elaborado por Gustavo Duncan y Alejandro Reyes, septiembre de 2009.

se puede calificar como un obstáculo crítico para la consolidación, que debe superarse para fundamentar el resto de programas de apoyo productivo”.

Muchos de los pobladores debieron abandonarlo todo por la violencia, por los actores armados y, especialmente, por los paramilitares, quienes se apoderaron de sus propiedades. Y la situación hoy se repite con la llegada de intereses oscuros detrás de este negocio que ha demostrado su rentabilidad.

## Los cultivos ilícitos

La presencia de los cultivos de uso ilícito en el territorio ha tenido un importante impacto económico y social en la región. Los estudios demuestran que la del Ariari es una de las zonas más antiguas en la producción de hoja de coca de Colombia y que allí llegaron esmeralderos y traficantes para cultivar marihuana y después hoja de coca. Luego, los colonos y campesinos aprendieron la técnica y empezaron a vender la base de coca en los mercados locales.

“Esta economía trajo un notorio dinamismo al comercio local, al transporte (fluvial y terrestre) y al mercado de la tierra (en algunos lugares aparecen medianas y grandes propiedades ganaderas) en los municipios del Ariari y en las zonas limítrofes con San Vicente del Caguán y San José del Guaviare. Con todo, el rasgo característico de este auge ilegal fue la permanencia e incluso el fortalecimiento de la economía campesina en las zonas rurales de los municipios productores de coca”<sup>27</sup>.

Además, la producción de hoja de coca generó un cambio en la vocación productiva y el paisaje del Meta. Mientras los cultivos de pancoger, como el maíz, el plátano, la yuca o el arroz eran los tradicionales, en municipios del departamento como Puerto Lleras y Vistahermosa empezaron a predominar las extensas superficies sembradas de coca.

En la década de los 80, la economía campesina tuvo una etapa de prosperidad: los campesinos lograron un ingreso constante por el alcaloide, dejaron de depender de sus cultivos tradicionales, aumentaron otros consumos y modificaron la relación de endeudamiento que tenían con los comerciantes. En algunos municipios del Meta, el alcaloide se convirtió en la moneda de transacción y la vía de intercambio de productos.

Poco a poco, para colonos, campesinos y población flotante, los cultivos ilícitos fueron la vía para la superación de sus necesidades básicas insatisfechas. Les era más fácil sacar el alcaloide que sus productos tradicionales. Vistahermosa, La Macarena, San Juan de Arama,

27 Gutiérrez, Omar. *Op. cit.*, pp. 70-71.

Maripirán, Puerto Concordia, Puerto Rico, Puerto Lleras, Puerto Gaitán y Uribe fueron los municipios que concentraron la mayor producción aprovechando su posición central, en algunos casos, y, en otros, la cercanía con otros municipios de los departamentos vecinos.

“La bonanza de la coca le hizo mucho daño a Vistahermosa. La gente pensaba que sin la coca no se podía vivir”<sup>28</sup>. “En Puerto Rico el apogeo de la coca fue entre 1998 y 2004. Se comercializaba en la calle. La situación ha cambiado, aunque el narcotráfico sigue siendo un eje de la presencia de los ilegales”<sup>29</sup>.

La bonanza duró hasta 1995, cuando se recrudeció la política antidrogas en el país y la lucha contra los carteles del narcotráfico de Medellín y de Cali, lo que produjo el desplome de los precios de la coca, el inicio de las fumigaciones y, por tanto, el comienzo de los problemas socioeconómicos para muchas familias y el surgimiento de nuevos factores de conflictividad.

Como ejemplo, solo en el Meta, en 2005, se fumigaron cerca de 14.500 hectáreas (cuatro veces más que en 2004), principalmente en Puerto Rico, Puerto Lleras, Vistahermosa, Maripirán y Puerto Concordia; es decir, el 10,7% del total del área fumigada en Colombia (138.779 hectáreas).

La fumigación con glifosato afectó a muchos cultivos tradicionales, amenazó el negocio rentable de poblaciones y generó que cultivadores y recolectores de coca, comerciantes, transportadores, pequeños y grandes empresarios ilegales, políticos y autoridades locales organizaran marchas, movilizaciones y paros en Putumayo y Caquetá, con incidencia en Meta. Además, las fumigaciones fueron uno de los factores que creó diferencias con los países vecinos, hasta el punto de que el Gobierno decidió reducirlas.

La guerrilla y los paramilitares también entraron en el negocio, lo que provocó la intensificación del conflicto. Por un lado, aumentaron las acciones armadas por la disputa del control de los recursos ilegales y los corredores estratégicos. Por otro, los recursos que consiguieron por dichos cultivos terminaron usándose para comprar nuevas armas.

En la última década se incrementaron los enfrentamientos entre la guerrilla y las Fuerzas Armadas en zonas donde se encuentra la mayor parte de cultivos de coca del departamento y hay una importante presencia de las FARC. Los militares lanzaron importantes operaciones para golpear las finanzas de la guerrilla a través de medidas como la aspersión aérea de cultivos ilícitos, la destrucción de laboratorios, la incautación de armamentos y explosivos, la captura de sus miembros y la promoción de las desmovilizaciones.

En 2005, se conoció una nueva estrategia del Gobierno: la operación ‘Colombia Verde’, mediante la cual más de 930 campesinos de diferentes regiones del país se concentraron en el parque de La Macarena para realizar labores de erradicación manual de cultivos de coca. Si bien ello contribuyó en la lucha contra la droga, porque entre 2005 y 2006 las aspersiones aéreas en



28 Miguel Briceño, Alcalde de Vistahermosa.

29 José Manuel Guerrero, Puerto Rico.



el Meta y la erradicación manual redujeron en el 36% las hectáreas con cultivos de coca en el departamento (pasó de 17.305 a 11.063 hectáreas), también provocaron que se intensificara el conflicto. Como respuesta a la erradicación manual, las FARC empezaron a sembrar minas antipersonal, en las que resultaron afectados pobladores y miembros de las fuerzas militares.

En el caso de las autodefensas,

“es importante señalar que en los años de expansión del bloque Centauros se produjo uno de los mayores incrementos en las áreas de cultivos de coca en el departamento. Así, se pasó de 9.222 hectáreas cultivadas en 2002 a 12.814 en 2003, que equivale a un incremento de 39%; en 2004, la cifra continuó en ascenso hasta llegar a 18.740, es decir, un aumento de 46% con respecto al año anterior. El bloque Centauros, por su parte, está directamente articulado a las AUC y su relación con el narcotráfico era muy estrecha. En 1996, las AUC se plantearon como propósito expandirse en el Meta y apropiarse de zonas de cultivos ilícitos y corredores estratégicos para su comercialización, marco en el que ocurrieron las masacres de Mapiripán (julio 1997) y Puerto Alvira (mayo 1998)”<sup>30</sup>.

Mientras los cultivos de pancoger eran los tradicionales, en Puerto Lleras y Vistahermosa empezaron a predominar las extensas superficies sembradas de coca.

Según el informe más reciente de la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito (de 2009), en Meta hay 5.525 hectáreas de coca sembrada, a diciembre de 2008, que representa el 7% del total de cultivos del país y es el cuarto departamento con el mayor número de hectáreas de este tipo. El municipio de Mapiripán en el Meta es uno de los 10 municipios del país con la mayor cantidad cultivada de coca y la mayor producción de cocaína (2.180 hectáreas cultivadas de coca para 2008) (cuadro 6).

Cuadro 6. CULTIVOS DE HOJA DE COCA EN EL META						
	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Meta	12.814	18.740	17.305	11.063	10.386	5.525
Colombia	86.340	80.350	85.750	77.870	98.899	80.953

Fuente: Censo de cultivos de coca 2008, UNODC.

“La región Meta-Guaviare ha sido tradicionalmente la de mayor cultivo de coca en el país, sin embargo el notorio incremento del cultivo de coca en las regiones Pacífico,

30 “Diagnóstico presidencial del Meta”, Vicepresidencia de la República, 2008

Putumayo-Caquetá y Central y la tendencia de reducción desde 2005 bajó esta región al cuarto lugar en 2007 y 2008. Al mismo tiempo, la región ha recibido muy poco apoyo de los programas de desarrollo alternativo<sup>31</sup>.

La siembra de estos cultivos también está afectando la biodiversidad del departamento y del sur del país, más si se tiene en cuenta que, en la Amazonia, por cada hectárea de coca sembrada se talan 4,5 hectáreas de bosque. Hay cultivos de coca en zonas de parques nacionales naturales –uno de los más afectados es el de la sierra de La Macarena, aunque en los últimos años se ha dado un importante descenso–. Mientras en 2005 se registraron 3.354 cultivos ilícitos; en 2006, 1.689; en 2007, 1.258, y en 2008, 581.

Entre los 15 parques con esta problemática, el de La Macarena registraba el primer lugar. Sin embargo, hoy esa posición la ocupa el de Nukak, en el Guaviare.

El Gobierno ha hecho inversiones importantes y ha promovido el desarrollo alternativo en zonas productoras de coca, entre ellas los municipios del Meta (Uribe, Mesetas, Vistahermosa y La Macarena) y de Caquetá (San Vicente del Caguán) que conformaron la zona de distensión. Se impulsaron diferentes proyectos y se constituyeron cinco asociaciones de productores campesinos (Asoproaju, Asoproadum, Asopropro, Asoproavih Y Asoproguejar).

Como lo dice una investigación contratada por el PNUD,

“la existencia de cultivos de uso ilícito es tal vez el indicador más revelador de la crisis que atraviesa la economía y la sociedad rural en el Occidente y Sur del Meta. Alrededor de la coca surgió una economía ilegal que ha logrado subordinar otras dinámicas productivas características de las zonas de frontera agrícola. Los gobiernos civiles se han visto debilitados por la corrupción y/o las amenazas de los grupos vinculados al narcotráfico. A esto se agrega que esta economía ilegal ha facilitado el fortalecimiento financiero de grupos armados irregulares (guerrillas y paramilitares) y ha incentivado los niveles de polarización y enfrentamiento entre los mismos por el control de la población y el territorio. Al punto que hoy controlan la compra y el comercio a gran escala de la base de coca en las zonas de mayor producción e interfieren en la vida social y política de los municipios<sup>32</sup>.”

## Situación política y de gobernabilidad

La corrupción y las profundas presiones sobre la administración departamental ante la injerencia de grupos armados ilegales en el contexto político y administrativo de la región



31 Informe de la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito, presentado en junio de 2009.

32 Varios autores (2007). Construcción participativa de alternativas sociales y productivas de alternativas sociales y productivas en áreas con presencia de cultivos de uso ilícito en el departamento del Meta - Componente de desarrollo rural y tierras (marzo).

han generado alto niveles de ingobernabilidad y crisis institucional en los ámbitos regional y municipal.

Para pobladores de la región, la corrupción ha sido la peor plaga para el Meta: “Si se mide el daño de la guerrilla, de los paramilitares y de la corrupción, la corrupción es la que ha provocado más daño siendo muy bárbaros los procedimientos usados por los paras y los demás actores del conflicto”<sup>33</sup>.

El manejo de las regalías se ha convertido en la prueba para quienes llegan a gobernar el departamento o los municipios beneficiados con dichos recursos. A pesar de los millonarios recursos que el departamento recibe por ese concepto, muchos municipios continúan con deficientes coberturas de educación básica, agua potable, alcantarillado y protección de población infantil, áreas que son las priorizadas para invertir dichos recursos.

Algunas investigaciones han demostrado que los recursos de las regalías no se invierten de manera adecuada y no siguen las básicas normas de contratación y transparencia. En un informe de la Procuraduría se alertó sobre casos extremos en el manejo de las regalías, como el de Meta, donde se hicieron convenios correspondientes a la vigencia 2007 por 267.659 millones, que se están investigando, y corresponden el 60% de las regalías. También se investiga la inversión de 172.000 millones de pesos en “patrimonios autónomos constituidos por particulares” entre 2006 y 2007<sup>34</sup>.

La captación de los recursos públicos no ha sido solo por fuerzas legales sino también por grupos armados ilegales, en asocio con funcionarios públicos. En época electoral, por ejemplo, se han iniciado investigaciones por el uso de recursos públicos de municipios del Meta en campañas electorales. En las elecciones de la última década ha sido una preocupación constante la relación de candidatos al Congreso y a cargos de elección popular en el departamento con personas vinculadas con el paramilitarismo, que no solo buscan el control político sino también el manejo de recursos públicos.

Este escándalo también ha sacudido al Meta, por hechos que, en su momento, conmocionaron al departamento: la Corte Suprema de Justicia halló responsable a Edilberto Castro, ex gobernador del departamento, de ser determinador de la muerte de tres políticos de ese departamento: Éuser Rondón, Nubia Sánchez y Carlos Sabogal. Castro Rincón fue condenado a 40 años de prisión. Según la Fiscalía, el gatillo lo apretaron los ‘paras’, pero el crimen beneficiaba a algunos de los políticos más poderosos del Meta, lo que mostró las relaciones entre las autodefensas y los dirigentes políticos.

La Corte investiga actualmente al ex senador metense Luis Carlos Torres por haberse reunido, presuntamente, con los paras del bloque Centauros al mando de Miguel Arroyave. Según dichas investigaciones, Torres le pidió a los paramilitares que en las elecciones a la

33 Entrevista a líderes de la Mesa humanitaria del Meta.

34 El Tiempo. Alerta de Procuraduría por regalías; entes territoriales se estarían saltando reglas de contratación (11 de abril de 2010).

Gobernación de 2003 apartaran del camino al candidato Éuser Rondón Vargas, quien estaba haciendo una fuerte campaña contra su candidato, Edilberto Castro, de Cambio Radical, quien fue elegido gobernador. Rondón –acusado a su vez de reunirse con Arroyave– no solo perdió las elecciones en un dudoso conteo, sino que fue asesinado junto a la diputada Sánchez y el ex gobernador Sabogal, tras denunciar constantemente los excesos de Castro en las contrataciones.

Torres es el esposo de Maritza Martínez, del partido Cambio Radical, quien ganó una curul al Senado en las últimas elecciones (las del 14 de marzo de 2010). Si bien es cierto que la relación de sangre no es por sí misma un impedimento para la vida pública, la Misión de Observación Electoral (MOE) ha llamado la atención sobre el testaferrato de votos o la capacidad de condenados o investigados por su vinculación con grupos ilegales de continuar incidiendo en política a través de sus familiares.

La capacidad de los gobernantes también se ha visto impactada por las acciones de las FARC, que más que apropiarse de los recursos, como lo intentaron en su momento los paramilitares especialmente en el norte de Colombia, han buscado influir en su manejo y distribución.

En época electoral era tradicional la capacidad de la guerrilla para afectar las elecciones, en la mayoría de los casos buscando su no realización o impidiendo que los candidatos presentaran libremente sus propuestas. En las últimas (14 de marzo), por el contrario, aunque se denunciaron irregularidades, la guerrilla no logró afectarlas de manera especial.

La presencia activa de grupos armados ilegales en el territorio ha debilitado a las administraciones, porque en muchas ocasiones son esas fuerzas y no los alcaldes quienes tienen el control y, además, porque en muchos casos los mandatarios no tienen la capacidad de inversión o de gestión ante la presión armada.

La gobernabilidad de la capital del departamento también se ha visto seriamente afectada: en Villavicencio el panorama político ha sido particularmente complejo durante los últimos cinco años, ya que en este tiempo hubo 14 alcaldes diferentes, destituidos por la Procuraduría General por irregularidades administrativas, problemas jurídicos y, en algunos casos, por corrupción.

Las debilidades en la gobernabilidad han tenido un impacto no solo sobre la administración departamental y municipal sino también han producido graves problemas en la ejecución de proyectos o el mantenimiento y mejoramiento de los servicios básicos para los 400.000 habitantes de la capital y los del resto de los municipios del Meta.

En el índice de desempeño fiscal, del Departamento Nacional de Planeación (DNP), un importante instrumento para mirar el desempeño de las autoridades locales, varios municipios del departamento no obtienen muy buenos resultados. En el más reciente informe revelado en julio de 2009, varios municipios del Meta registran uno de los más deficientes desempeños fiscales, entre ellos algunos que manejan regalías. Los que más se rajan, en una



calificación sobre 100, son Cabuyano (27,77); Lejanías (35,27), El Dorado (37,38), Restrepo y Fuente de oro (cada uno con 43,76) y Vistahermosa (45,30).

La crisis política en el Meta por las ya mencionadas situaciones de corrupción y control por parte de los grupos armados se explica también por la falta de escenarios plurales en los que las diferentes corrientes políticas e ideológicas puedan expresarse de manera libre y con la garantía del respeto a sus derechos. Aún hoy, como en las décadas pasadas, los asesinatos y amenazas han sido mecanismos para quitarle posibilidades a fuerzas diferentes a las tradicionales. Esto ha hecho evidente las limitaciones de los Gobiernos locales por constituir una gobernabilidad democrática ante muchos factores que son los mismos del pasado y, en algunos casos, son las causas profundas de la conflictividad actual del Meta. No hay suficientes espacios de participación civil en los Gobiernos municipales y en escenarios consagrados por la ley como los consejos de planeación territorial, las veedurías ciudadanas y las juntas administradoras locales.

También le han restado legitimidad a los mandatarios y ha mermado su gobernabilidad la deficiente protección de los derechos de los ciudadanos, la falta de garantía para el pleno ejercicio de los derechos ciudadanos, la debilidad para que la institucionalidad contribuya a la resolución pacífica de los conflictos –y no sea el motor o el creador de los mismos– y el hecho de que los sectores en estado de mayor vulnerabilidad no hayan encontrado respuesta a sus reclamos y necesidades.

En la comunidad hay un alto grado de desconfianza con la institucionalidad, no solo por los factores señalados sino también porque quienes tendrían el deber de protegerlos han sido vinculados a procesos como el de “los falsos positivos”. En el Meta han causado impacto las versiones libres que ha rendido ante la Fiscalía, en el proceso de justicia y paz, el ex paramilitar Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, quien confesó (el 17 de febrero de 2010) 13 hechos en los que, según él, los paramilitares del Frente Meta del bloque Centauros le ayudaron a miembros de la fuerza pública a presentar resultados en la lucha contra la guerrilla en la zona.

En Villavicencio el panorama político ha sido particularmente complejo durante los últimos cinco años, ya que en este tiempo hubo 14 alcaldes diferentes.

## Una nueva estrategia territorial: la recuperación social del territorio

Seis municipios del Meta (Puerto Rico, La Macarena, Uribe, Vistahermosa, San Juan de Arama y Mesetas) fueron incluidos en la estrategia de recuperación social del territorio del Gobierno nacional, que en el departamento se conoce con el nombre de Plan Consolidación de La Macarena.

Estos municipios hacen parte de la llamada “Zona Sur”, que comprende dos municipios del Caquetá (San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá); dos del Guaviare (Calamar y Miraflores) y los seis del Meta. Los del Caquetá y el Meta hicieron parte de la zona de distensión.

Para llegar a la “recuperación social”, el Gobierno efectuó primero la recuperación militar. Las fuerzas militares desplegaron acciones conjuntas con tropas del Ejército, de la Armada Nacional y de la Fuerza Aérea en Caquetá, Meta, Guaviare y Putumayo, que se conocieron con el nombre de Plan Patriota y, hoy, como Plan Consolidación.

Para el Gobierno, el plan militar es una respuesta a la situación del Meta. “La recuperación social no se puede hacer si primero no hay una recuperación militar como la que las fuerzas militares adelantamos en la zona de distensión y en municipios como Vistahermosa o Uribe, por ejemplo”, señala el comandante de las Fuerzas Armadas, general Freddy Padilla de León<sup>35</sup>.

Efectivamente, en el Meta, en especial en San Juan de Arama, Vistahermosa y Puerto Rico, hay una alta presencia militar y, por eso, los alcaldes de la zona señalan que ha mejorado el orden público y se ha reducido el tráfico de coca, aunque aún hay guerrilleros, paramilitares y, en los últimos meses, estructuras emergentes que están extorsionando a los pobladores.

Según Pastoral Social, esta recuperación ha significado más libertad de culto y la presencia de diferentes grupos religiosos –que habían sido sacados por la guerrilla– y la posibilidad de ir a veredas donde antes el conflicto lo impedía.

Después de la recuperación militar, se inició lo que el Gobierno ha llamado la recuperación social, que ha significado una fuerte inversión social y es el eje de la recuperación social del territorio. Con dichos recursos se han construido y están en proceso obras de infraestructura (escuelas, carreteras, etc.) que las administraciones locales podrían haber construido solo después de 20 años de ahorro.

El Gobierno nacional ha expresado que lo más importante en La Macarena es hacer de ella un territorio libre de cultivos ilícitos, combinando la erradicación de cultivos con el desarrollo económico y social. Los recursos del PCIM están orientados al mantenimiento y conservación de la red vial terciaria de los 6 municipios que integran el área, educación, salud y electrificación. Una de las principales obras de este proyecto es la vía que comunicará a La Macarena con San José del Guaviare, a cargo de ingenieros militares.

Otros programas institucionales por los cuales se implementa la recuperación social del territorio son: ‘Colombia Responde’, que realiza acompañamiento a grupos para la participación ciudadana y la generación de proyectos productivos, en el cual participa la cooperación Internacional; la ‘Legión del Afecto’, que busca la prevención de la violencia en los jóvenes; el Fondo de Reparación a Víctimas; el Programa RESA (Red de Seguridad Alimentaria) de



35 Entrevista realizada en el 2008.

Acción Social y Familias Guardabosques, grupos móviles de erradicación de cultivos ilícitos, entre otros.

Sin bien esta estrategia ha dado resultados en algunos aspectos, también ha sido un nuevo factor de conflictividad y tensión entre los diferentes actores del territorio y en el ámbito nacional por varios factores.

El primero, porque algunas organizaciones consideran que las inversiones se están realizando sin contar con las capacidades regionales y sin tener en cuenta los procesos sociales. Por eso se preguntan si la estrategia de intervención a través del CCAI se está articulando con los territorios, teniendo en cuenta a las autoridades locales, los procesos sociales, las respectivas dinámicas y las realidades regionales.

El segundo factor de tensión se debe al hecho de que las inversiones sociales en estos municipios que hacen parte del Plan Consolidación se están efectuando con las fuerzas militares. Desde 2006, esas acciones militares van acompañadas con jornadas humanitarias y de acción integral en las que se buscan lazos entre las tropas y la comunidad.

El tema de debate es cómo articular la acción militar con la acción civil, sin que una quede supeditada a la otra y para que se respeten los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Para muchas organizaciones, el motivo de tensión reside en introducir a la institución armada, en tiempos de conflicto, en la producción del desarrollo para la paz, que por definición es una producción no armada y esta por fuera de los instrumentos, las normas y las disciplinas y estrategias de la guerra.

También existe preocupación de que la estrategia lleve a la militarización de los espacios no armados del Estado, que son fundamentales para la gobernabilidad y la paz, y, especialmente, que un programa social o humanitario en el que participen las Fuerzas Armadas termine por involucrar a la población en el conflicto armado. El problema es que en zonas de alta confrontación, como el Meta, recibir ayuda o cualquier clase de apoyo de uno de los grupos en confrontación la convierten, de inmediato, en objetivo militar de otro.

Un eje más de discusión es que sean otros los que asuman responsabilidades que les corresponden a las administraciones locales. Es decir, que se les estén usurpando sus funciones a las autoridades locales. Organizaciones sociales se preguntan por qué el Ejército está haciendo carreteras y obras de infraestructura y por qué están prestando servicios básicos o realizando acciones sociales e, incluso, humanitarias.

Se teme que no se esté dando una consulta previa con indígenas y afros ni se esté respetando la autonomía territorial y administrativa, y se vaya en contravía de avances legislativos y constitucionales, como la descentralización política y administrativa.

Después de la recuperación militar, se inició lo que el Gobierno ha llamado la recuperación social, que ha significado una fuerte inversión social.

En un informe que evalúa los resultados estratégicos del Plan de Consolidación de La Macarena se advierte que,

“en La Macarena la consolidación de la seguridad requiere la acción coordinada de la fuerza pública no solo para neutralizar la capacidad ofensiva de grupos armados ilegales sino para apoyar la recuperación y restitución de derechos de la población sobre la tierra despojada” porque “el más importante de los derechos que debe reconocerse es la propiedad sobre la tierra ocupada por los colonos, pues sobre ellos se fundan todas las transacciones de la economía de mercado y las posibilidades de supervivencia económica”<sup>36</sup>.

## Impacto del conflicto armado

El conflicto en el Meta –y en general en el país– constituye uno de los más fuertes obstáculos para el logro de un desarrollo económico y social equitativo, la desaparición de la pobreza extrema y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática.

Muchos analistas, organizaciones y líderes del Meta señalan que la situación del conflicto no ha mejorado de fondo: si bien las acciones militares de las FARC han disminuido considerablemente y estarían debilitadas por las operaciones armadas del Gobierno, continúan siendo un factor clave en el conflicto del departamento.

Por otra parte, aunque la masiva desmovilización de paramilitares contribuyó al descenso de los principales indicadores de conflicto, son numerosos los casos de delitos cometidos por desmovilizados y miembros de las llamadas estructuras emergentes.

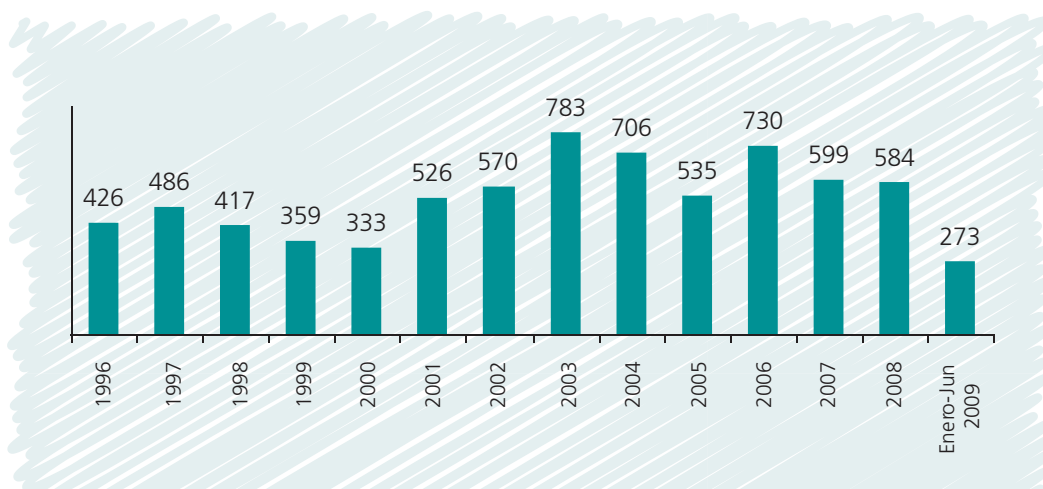
Las consecuencias humanitarias del conflicto tienen un impacto en los sectores más vulnerables de la población. Los grupos armados ilegales están haciendo uso sistemático de minas y artefactos explosivos improvisados, generando una grave crisis humanitaria que afecta a la población de manera directa e indirecta. Además, el departamento ha registrado en los primeros años de la década unas de las más altas tasas de homicidios, aunque en los últimos años se ha dado un importante descenso. Es uno de los departamentos que más expulsa población a causa de los diferentes conflictos que enfrenta. Otros impactos humanitarios tienen que ver con el reclutamiento forzado de niños y jóvenes a los grupos armados ilegales, los ataques a la población civil, los paros armados y los bloqueos y diversas manifestaciones del conflicto que violan sistemáticamente sus derechos y engrosan el sufrimiento de mujeres, niños, niñas, minorías étnicas y población pobre, cada vez en estado de mayor vulnerabilidad.



36 “El Plan consolidación de la Macarena”; policy paper elaborado por Gustavo Duncan y Alejandro Reyes, septiembre de 2009.



**Gráfico 1. Homicidios en Meta, 1996-junio 2009**



El efecto sobre la población se refleja en algunos de los principales indicadores del conflicto armado que se resumen en el cuadro 7.

Cuadro 7. INDICADORES DE IMPACTO DE CONFLICTO EN POBLACIÓN DEL META							
Hecho	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Enero-junio 2009
Homicidios	783	706	535	730	599	584	273
Casos masacres	15	24	4	18	0	19	0
Homicidios de alcaldes y ex alcaldes	0	3	0	0	0	1	0
Homicidio de concejales	2	2	0	0	0	0	0
Homicidio de indígenas	1	0	0	0	0	0	0
Secuestros	116	102	86	72	17	41	9
Desplazamiento (expulsión)	10.831	9.221	16.189	17.050	13.250	10.621	2.733
Desplazamiento (recepción)	10.209	9.681	15.662	14.019	12.381	11.651	3.068
Minas/Muse (eventos/víctimas)	139/73	189/98	251/170	318/168	248/81	306/130	196/14
Acciones armadas (ataques, hostigamientos, emboscadas, etc.)	28	72	67	41	44	15	34
Contactos armados	58	116	121	261	230	125	39

Fuente: Observatorio de Derechos Humanos, Vicepresidencia de la República, diciembre de 2009.

## Homicidios y masacres

El homicidio es uno de los delitos que más ha afectado a la población a causa del conflicto armado. Su aumento progresivo se inició a partir de 2001, y es el año 2007 el más crítico (ver gráfico 1). Desde el 2007 se ha dado un progresivo descenso que para el Gobierno se explica por su política de seguridad democrática y para organizaciones sociales, porque se han puesto en práctica otras estrategias contra la población civil, como las amenazas, las intimidaciones, el confinamiento y el desplazamiento forzado.

En el curso de las dos últimas décadas, 1999 fue el año en el que menos homicidios se presentaron en el Meta: 359. Su aumento, a partir de 2001, coincide con la ruptura de los diálogos de paz (en 2002), el inicio de fuertes acciones militares contra la guerrilla, la presencia de los paramilitares y la reorganización de las FARC, después de tres años de zona de distensión.

Entre 2003 y 2006, Meta registró una tasa promedio de 90 homicidios por cada 100.000 habitantes, convirtiéndose en el segundo departamento con más víctimas por este delito en todo el país, después de Arauca.

Los municipios más afectados, como lo señala un informe de la Vicepresidencia, fueron los de la región del Ariari (Vistahermosa, San Juan de Arama, El Castillo, Mesetas, Fuente de Oro, El Dorado, San Luis de Cubarral, Puerto Lleras, Puerto Rico, La Macarena, Uribe, Lejanías y Puerto Concordia) y los del Piedemonte central (Castilla la Nueva, Guamal y San Carlos de Guarda).

En estos cuatro años se dio un aumento de varios factores: en las acciones de las fuerzas militares (se incrementó en el 49% el número de los contactos armados por iniciativa de la fuerza pública); en la confrontación armada entre los bloques de las FARC y el bloque Centauros de las AUC, y entre este bloque paramilitar y las Autodefensas del Casanare; y en los señalamientos a la población de tener vínculos con la guerrilla o los paramilitares, lo que significó el asesinato, especialmente selectivo, de numerosos pobladores.

Municipios en donde se presumía que había una fuerte presencia de guerrilla y de paramilitares fueron afectados de manera principal, entre ellos Vistahermosa, La Macarena y Mesetas, por un lado, y El Castillo, San Luis de Cubarral, El Dorado, San Juan de Arama y Fuente de Oro, por otro.

Asimismo, las presiones y asesinatos de ciudadanos como algunos de Puerto López se debieron a los enfrentamientos entre las dos tendencias paramilitares que se disputaban el control territorial y del tráfico de la coca.

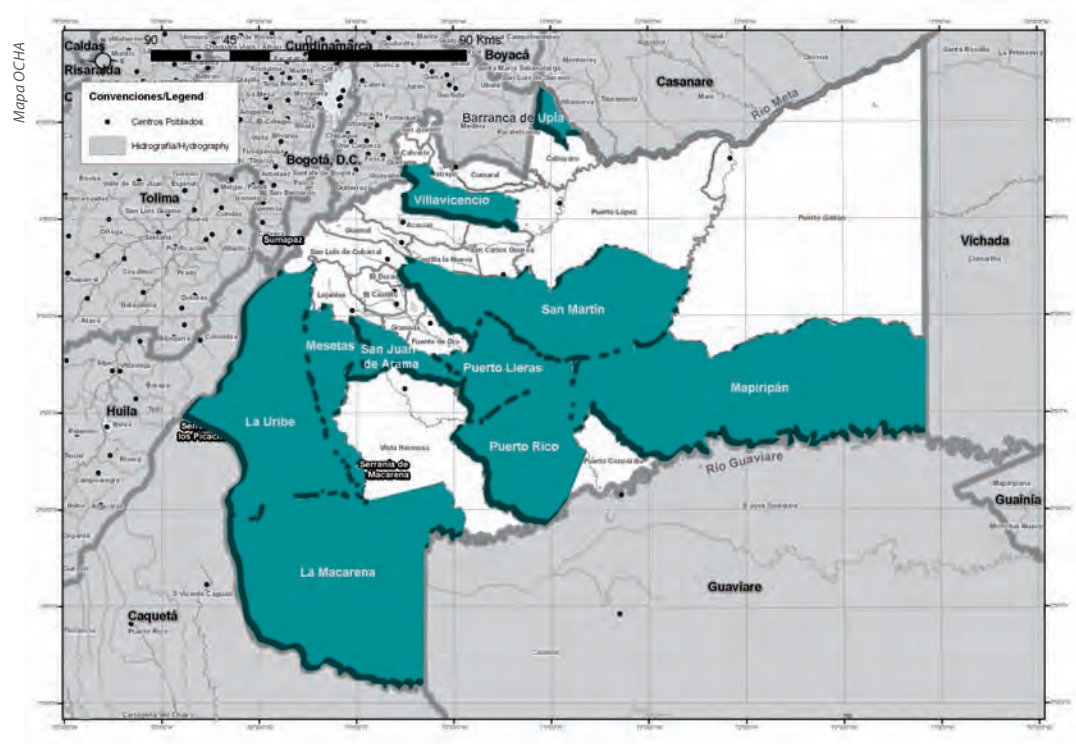
Entre 2003 y 2006, la fuerza pública lanzó varias operaciones militares (como el Plan Patriota y la operación Emperador), que obligaron a que la guerrilla se replegara, y se produjo la desmovilización colectiva de gran parte del bloque Centauros. Esto generó que en 2005 se diera un descenso de los homicidios en La Macarena, Lejanías, Uribe, Puerto Lleras, San Juan de Arama, El Castillo, Granada y Fuente de Oro.



## Los 10 municipios del Meta con la más alta tasa de homicidios 2008

Uribe	413,04
Puerto Rico	229,74
Villavicencio	227,39
Mesetas	212
San Juan de Arama	186,3
Barranca de Upía	146,24
Mapiripán	145,88
La Macarena	142,42
Puerto Lleras	95,27
San Martín	94,05

Fuente Vicepresidencia de la República.



A partir del 2007, han disminuido los ciudadanos asesinados y el Gobierno ha continuado con sus acciones militares de amplia envergadura. Precisamente, en 2010 ha informado que las fuerzas militares realizan cuatro “grandes operaciones”: la operación Soberanía, con énfasis en la seguridad de la infraestructura económica del departamento; la operación Eclipse, contra los frentes 26, 42 y 53 de las FARC; la operación Dinastía, contra el frente 39 del mismo grupo; y la operación Epopeya, contra las estructuras criminales de alias *Cuchillo* y *El Loco Barrera*<sup>37</sup>.

Junto a los homicidios, otro delito que ha tenido un impacto especial en la población es el de las masacres, ocurridas especialmente entre 1997 y 2000 en Mapiripán y Puerto Lleras, con la llegada de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu). Las masacres de Mapiripán son las que más recuerdan los ciudadanos. Una ocurrió entre el 15 y 20 de julio de 1997, dejó 49 víctimas mortales y provocó el desplazamiento forzado del 70% de la población, y la otra sucedió el 4 de mayo de 1998, en la que fueron asesinadas 17 personas, entre ellas dos menores de edad, y se desplazaron más de 400 personas.

Las masacres en este periodo fueron uno de los argumentos de las FARC para suspender, en varias ocasiones, los diálogos de paz que se realizaban en ese momento y que las

37 Secretaría de Prensa de la Presidencia. FF.MM. adelantan cuatro grandes operaciones en el Meta contra el narcoterrorismo (17 de abril de 2010).

autodefensas trataron de sabotear a través de crímenes y torturas a poblaciones acusadas de tener afinidad con la guerrilla.

Entre 2003 y 2006 se presentaron 13 casos de masacres en el departamento, cifra que disminuyó notablemente, entre otros factores, por la desmovilización de importantes sectores de las autodefensas que operaban en el Meta. El impacto no ha sido solo por el número de víctimas (cuadro 8), sino por las secuelas que ha dejado en la comunidad.

Cuadro 8. VÍCTIMAS POR MASACRE - META, 2005-2009					
	2005	2006	2007	2008	2009
Vistahermosa	0	0	0	11	0
Villavicencio	4	0	0	4	0
Cubarral	0	6	0	0	0
Guamal	0	4	0	0	0
Mesetas	0	4	0	0	0
Puerto López	0	4	0	0	0
San Juan de Arama	0	0	0	4	0
Puerto Rico	0	4	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>0</b>

*Fuente:* Observatorio de Derechos Humanos, Vicepresidencia de la República, diciembre de 2009. Oficina Promotora de Paz de la Gobernación del Meta.

Entre las víctimas de homicidios y masacres han estado líderes políticos y de organizaciones sociales, defensores de derechos humanos, indígenas, concejales, sindicalistas, ex alcaldes, ex concejales, maestros, niños, niñas, jóvenes y mujeres cabeza de hogar. En la mayoría de los casos, los grupos armados han usado estos delitos para debilitar las bases políticas y sociales de unos y otros.

## Desplazamiento forzado

Los homicidios, las minas, las amenazas e intimidaciones, la defensa de sus derechos (especialmente sus reclamos sobre la tierra), los enfrentamientos entre los diversos grupos armados, las fumigaciones y la busca de oportunidades han sido algunos de los principales factores que han obligado a pobladores del Meta a dejar el territorio.



En el desplazamiento, como en los homicidios, se ha dado un descenso importante en los últimos años, según las estadísticas de Acción Social, aunque la ONG Codhes señala que la realidad de este departamento y de otros del país evidencia que se está dando de manera masiva un desplazamiento interno y, especialmente, el confinamiento de pobladores que no pueden dejar sus veredas, sencillamente porque se lo impiden los armados o porque no pueden por la confrontación armada.

Los años que registran un aumento de delito coinciden con los de la mayor confrontación armada (entre guerrilla y paramilitares, entre los mismos paramilitares y entre las fuerzas militares y la guerrilla) y el incremento de los homicidios y las masacres.

Es decir, entre 2003 y 2006 Meta se convirtió en el sexto departamento más afectado por este fenómeno, después de Antioquia, Caquetá, Bolívar, Cesar y Tolima, y registró el mayor número de desplazados en la última década.

En 2003, los enfrentamientos entre las FARC y los paramilitares fueron una causa central del desplazamiento, como ocurrió en El Castillo, donde la disputa por el territorio entre la guerrilla y el bloque Centauros de las AUC llevó a que este municipio presentara una de las mayores tasas de homicidio del departamento y una de las cifras más elevadas en materia de desplazamiento forzado.

Otro municipio afectado de manera especial fue Mapiripán, por la misma disputa de los grupos armados y las intimidaciones, que se comprobaron con las masacres en este municipio y en su corregimiento de Puerto Alvira. En junio de 2003, llegaron a la cabecera municipal de Mapiripán cerca de 700 personas de diferentes veredas.

En 2003, las cifras más elevadas de desplazamiento se presentaron precisamente en Uribe con 1.842 víctimas, El Castillo con 1.652 y Mapiripán con 1.034.

En 2004, municipios como Vistaherosa registraron un incremento de 71%, mientras que otros municipios del Ariari-Guayabero, como Mesetas, San Juan de Arama y Puerto Concordia, registraron más de 500 víctimas de desplazamiento forzado. En 2005, los desplazamientos forzados en el departamento subieron en 73%, con una situación crítica en Vistaherosa, Puerto Rico y La Macarena. Un año después, los municipios más afectados continuaron siendo los de la región Ariari-Guayabero, aunque aumentó la crisis en la región Oriente y en Mapiripán, especialmente en San Martín y Puerto Gaitán, que registraron incrementos de 99% y 42%, respectivamente.

“El incremento en estos municipios corresponde a la avanzada del bloque Centauros hacia las zonas de antigua influencia de las FARC, ubicándose en el casco urbano de Vistaherosa y en territorios de San Juan de Arama. Allí, las principales causas de desplazamiento han sido los riesgos por la siembra de minas antipersonal, los retenes ilegales, las amenazas, las elevadas tasas de homicidio y la presunción de casos de desaparición forzada”<sup>38</sup>.

38 Vicepresidencia de la República (2008). *Diagnóstico presidencial del Meta*, pag. 16

Entre los municipios más afectados están los que hicieron parte de la zona de distensión (cuadro 9), en donde aumentó este delito, sobre todo cuando se inició lo que el Gobierno denominó la recuperación militar de este territorio.

**Cuadro 9. DESPLAZAMIENTO EN MUNICIPIOS DE ZONA DE DISTENSIÓN DEL META, 2003-2009**

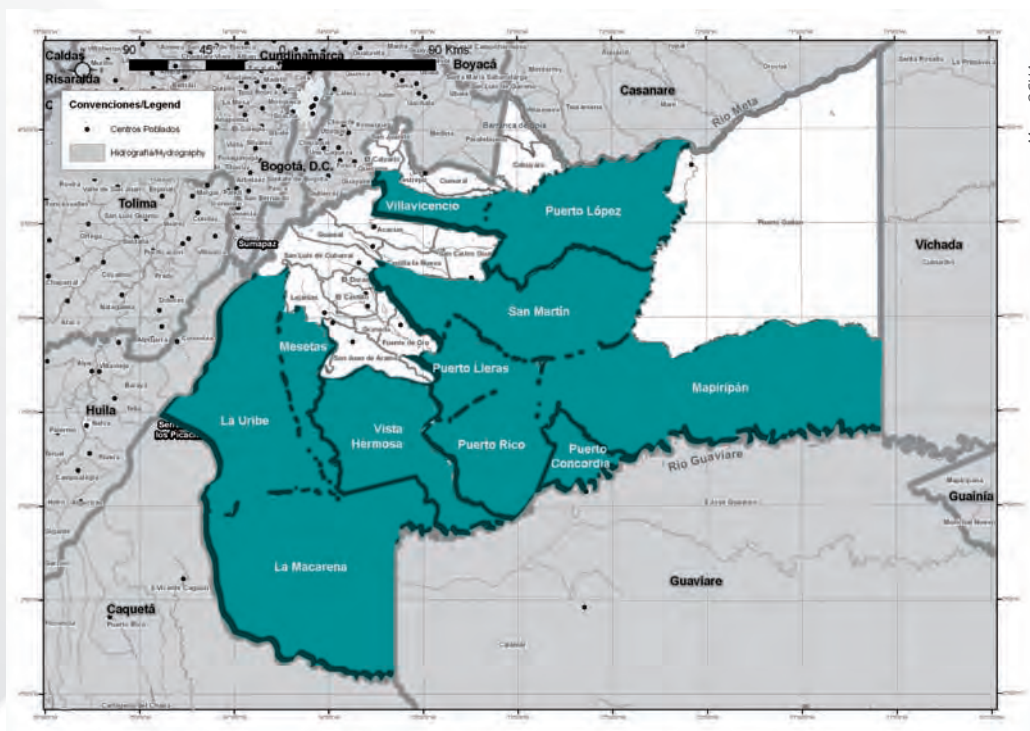
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Enero a junio-2009
La Macarena	353	423	925	1.042	928	697	159
Mesetas	632	612	859	921	596	592	122
Uribe	1.848	432	533	636	649	390	107
Vistahermosa	834	1.461	4.544	5.429	3.702	2.553	684

*Fuente:* Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, Vicepresidencia de la República.

A partir de 2007, comenzó el descenso de víctimas por el desplazamiento. Por una parte, por la desmovilización de parte del bloque Centauros de las AUC. Por otro, debido a la mayor presencia de la fuerza pública, que ha impedido que la guerrilla tenga la iniciativa armada.

Sin embargo, aún hoy continúan los señalamientos contra la población de ser colaboradora de la guerrilla o de las autodefensas y siguen los enfrentamientos entre la guerrilla y

### Los 10 municipios del Meta con el mayor número de desplazados expulsados de sus tierras en 2008



Vistahermosa	2.553
Mapiripán	1.599
Puerto Rico 1,131	227,39
La Macarena	697
Msetas	592
Puerto Concordia	452
Villavo	416
Uribe	390
Puerto Lleras	142,42
Puerto López	340
San Martín	314

*Fuente:* Vicepresidencia de la República.

las fuerzas militares, factores que siguen causando la expulsión de las comunidades. Otro factor importante es la presencia de las estructuras emergentes de *Cuchillo*, en zonas que antes dominaban las autodefensas, y la banda criminal de Los Paisas.

En los últimos años se ha visto un desplazamiento interno, interveredal o de las veredas hacia los cascos urbanos, y la tendencia de las víctimas a llegar a los principales centros urbanos de la región (Villavicencio, Granada y Acacías), donde consideran que tendrán más garantías para la defensa de sus derechos, como lo señalan la Defensoría del Pueblo y la Personería de Villavicencio. Un caso especial se presenta en Villavicencio, a donde ha llegado entre 2003 y junio de 2009 el 50% de la población expulsada del Meta y de otros departamentos, en especial de Guaviare, Casanare, Arauca, Vichada y Cundinamarca (cuadro 10).

Cuadro 10. RECEPCIÓN DE POBLACIÓN DESPLAZADA EN VILLAVICENCIO						
2003	2004	2005	2006	2007	2008	Enero a junio-2009
4.294	5.052	8.560	6.036	6.634	6.302	1.508

*Fuente:* Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, Vicepresidencia de la República

“El privilegiar la llegada a los grandes centros urbanos puede tener diferentes explicaciones. De un lado, la debilidad administrativa de los principales municipios expulsores para atender el fenómeno y las víctimas, a mediano y largo plazo, y la mayor capacidad de respuesta por la concentración de entidades y de programas, en especial en materia de reubicación. Por otro lado, hay una mayor sensación de seguridad. Sin embargo, este fenómeno enfrenta a los municipios receptores a un crecimiento no planeado, que se refleja en la proliferación de barrios subnormales, sin el acceso a los servicios públicos básicos, como son los casos de Ciudad Porfía, La Reliquia y la Nohora en la capital departamental”<sup>39</sup>.

Las víctimas del desplazamiento están enfrentando una nueva situación que tiene que ver con relaciones indebidas de abogados particulares, revelada en el informe más reciente de la MAPP-OEA, de abril de 2010:

“Las instituciones en los departamentos de Sucre, Córdoba, Bolívar, Meta, Guaviare y Atlántico han expresado su preocupación por los poderes que firmaron los desplazados en favor de abogados para la tramitación de la Reparación Administrativa, donde se

39 Vicepresidencia de la República (2008). *Diagnóstico presidencial del Meta*.

establecen los honorarios profesionales por un valor correspondiente al 20% del monto de la reparación<sup>40</sup>.

Esta situación ha generado la necesidad en el departamento de capacitar y fortalecer aún más a las comunidades de desplazados para que no sean víctimas de este tipo de abogados.

Los indígenas son una de las poblaciones a las que los grupos armados están obligando a dejar sus lugares de origen, producto de presiones, amenazas, intimidaciones y el reclutamiento de sus integrantes, niños, niñas y jóvenes, especialmente. Un total de 512 indígenas de diferentes etnias han salido expulsados entre 2005 y 2008, y los más afectados son los municipios de Mapiripán, principalmente, y Vistahermosa (cuadro 11).

**Cuadro 11. DESPLAZAMIENTO (EXPULSIÓN) INDÍGENAS**

Municipios	2005	2006	2007	2008	Total
Mapiripán	20	14	11	247	292
Vistahermosa	44	30	10	17	101
Puerto Rico	31	8	19	7	65
Mesetas	21	6	9	16	52
Puerto Concordia	33	8	0	8	49
La Macarena	11	11	12	11	45
Uribe	2	7	12	10	31
Puerto Gaitán	11	3	10	4	28
Villavicencio	7	6	8	7	28
Lejanías	15	2	0	0	17
Puerto Lleras	12	1	2	2	17
Puerto López	4	0	6	4	14
San Juan de Arama	8	0	6	0	14
Fuente de oro	0	4	4	0	8
Castilla La Nueva	0	5	0	2	7
Total	153	43	0	316	512

*Fuente:* Observatorio de Derechos Humanos, Vicepresidencia de la República, diciembre de 2009. Oficina Promotora de Paz de la Gobernación del Meta.

40 Informe 14 de la MAPP-OEA, abril 2010, p. 11





Esta situación se agudizó especialmente en 2008, cuando el desplazamiento de la población indígena ascendió en el 198% con relación al año anterior.

Las mujeres son también unas de las principales víctimas. Recientemente la Corporación Sisma Mujer y aproximadamente 90 lideresas, líderes sociales y organizaciones defensoras de derechos humanos, entre ellas mujeres y organizaciones que hacen parte del Observatorio de los Derechos Humanos de las Mujeres en Colombia, denunciaron que fueron declaradas objetivo militar y amenazadas de muerte. Según el comunicado<sup>41</sup>, un importante número de organizaciones a las que se dirige la amenaza –entre ellas a lideresas de Meta- se dedica a la defensa de los derechos humanos de mujeres en situación de desplazamiento.

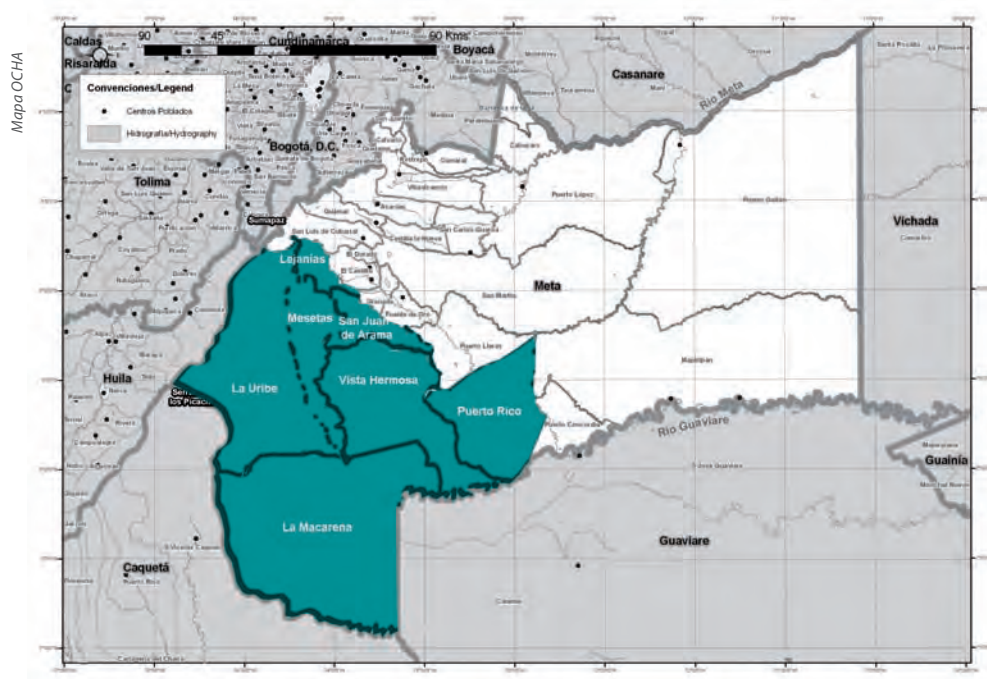
## Víctimas por minas antipersonal

Meta es el segundo departamento del país, después de Antioquia, con el mayor número de víctimas y de eventos (accidentes e incidentes) por esta clase de artefactos, entre 1990 y marzo de 2010, según el Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal del Gobierno nacional. En ese periodo, las minas dejaron 858 víctimas en los

### Los municipios del Meta con el mayor número de accidentes por minas

Vistahermosa	117
Uribe	53
Puerto Rico	47
La Macarena	43
San Juan de Arama	33
Mesetas	33
Lejanías	15
Uribe	390
Puerto Lleras	142,42
Puerto López	340
San Martín	314

Fuente Vicepresidencia de la República.



41 Comunicado de Prensa, Mayo 19 de 2010, "Se intensifican las amenazas contra lideresas en situación de desplazamiento forzado, y aumentan las organizaciones de derechos humanos amenazadas", Sisma Mujer.

2.025 eventos que se presentaron, lo que representa el 13% de hechos de toda Colombia. De los 10 municipios de Colombia con más eventos entre 1990 y marzo de 2010, en el primer lugar está Vistahermosa, con 480 eventos. También aparecen Uribe (con 343) y Puerto Rico (327).

Entre 1990 y 2001, en Vistahermosa solo se registró una víctima (en 1998), pero la situación de este municipio (y de los demás) empeoró a partir de 2002. Desde este año, es el municipio con más víctimas de los 29 del Meta. Según la estadísticas de 1990 a marzo de 2010, es el segundo municipio del país con más víctimas, 264.

De los cuatro municipios del Meta que comprendieron la llamada zona de distensión, La Macarena, Uribe, Vistahermosa y Mesetas –además de San Vicente del Caguán, de Caquetá–, Vistahermosa es el que tiene más minas y víctimas.

Los únicos 8 municipios, de los 29 que tiene el departamento, en los que no se presentan víctimas entre 1990 y junio de 2009, según las cifras del Gobierno, son San Luis de Cubarral, Castilla la Nueva, San Carlos de Guarda, Cabuyaro, Barranca de Upía, Puerto López y San Martín.

En este departamento, como en el resto del país, la mayoría de las víctimas, de 1990 a junio de 2009, fueron hombres (804 y 19 mujeres) y mayores de edad (765). El número de niños, niñas y jóvenes víctimas ha alcanzado la cifra de 58. Entre el total de víctimas en ese periodo, la mayoría fueron militares (528) y, en menos proporción, civiles (295).

En 1991, se registraron en el Meta las tres primeras víctimas de minas antipersonal y MUSE (municiones sin explotar), exactamente en Mesetas. Con el proceso de paz entre el Gobierno y las FARC, de 1999 a 2002, la guerrilla utilizó minas para defender los alrededores de la zona de distensión. Así, el incremento del uso de minas-MUSE se registró a partir de 2003, después del rompimiento de los diálogos (febrero de 2002). Asimismo, a partir del mismo año también se registra el aumento de las víctimas. Precisamente, el periodo 2002-junio 2009 concentra el 95% de las víctimas totales que se registra en el departamento desde 1990.

Con el inicio de los Gobiernos de Álvaro Uribe, se dio un aumentó en el pie de fuerza y de las acciones militares contra la guerrilla, como el Plan Patriota, en el Meta y otras regiones del sur del país. En el marco de ese plan, el Gobierno puso en marcha varias operaciones para debilitar a la guerrilla, como la operación Libertad Uno, la operación Tanathos en 2002 y la operación JM, que inició en diciembre de 2003.

En respuesta, las FARC empezaron a minar los territorios para evitar la avanzada de la fuerza pública. El incremento del uso de minas por parte de esta guerrilla coincide con la intensificación de la confrontación en el territorio.

En el año 2005 se dio un alza significativa del uso de minas y de víctimas, que ubicó al Meta como el segundo departamento más afectado en el país, después de Antioquia. En ese año, precisamente, se inició la operación Emperador por parte del Ejército.

Debido a las acciones militares, las FARC replantearon su estrategia territorial y se replugaron a los municipios de Vistahermosa, La Macarena y Uribe, que son tres municipios que cuentan con el mayor número de minas antipersonal, entre 1990 y junio de 2009. El aumento



a partir de 2006 también se debe a la estrategia de esta guerrilla de sembrar minas para evitar el avance de las fuerzas militares, lo que explica el incremento entre 2006 y 2008, época que coincide con importantes operaciones militares de las fuerzas militares.

Meta es el segundo departamento del país con el mayor número de minas y el sexto con el más alto volumen de cultivos de uso ilícito, según el más reciente informe de UNODC. Aunque diferentes sectores –entre ellos el de las fuerzas militares– señalan que hay una relación directa entre cultivos ilícitos y la siembra de minas-MUSE, no en todos los casos esta relación es tan clara. Por ejemplo, Mapiripán es uno de los 10 municipios de Colombia con más hojas de coca, pero es uno de los que menos eventos con minas-MUSE registra en el departamento. En todo Meta subieron tanto los cultivos ilícitos como el número de eventos en 2003 y 2004, aunque después dicha tendencia no continuó.

Este departamento ha sido escenario de desminados militares, especialmente en cinco municipios. Las 769 operaciones de se tipo que se han adelantado entre 2003 y 2008 se han realizado en Vistahermosa (203 operaciones); Puerto Rico (171), Uribe (104), Mesetas (70) y La Macarena (54).

## Las estructuras emergentes

En varios municipios del Meta hay una fuerte presencia de estructuras emergentes que realizan acciones contra la población, como desapariciones, homicidios, amenazas y extorsiones, y actúan de manera especial contra líderes comunitarios y sociales y poblaciones indígenas y afrocolombianas.

Esta realidad la ha dado a conocer la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia MAPP-OEA y la propia Policía Nacional.

En su informe número 12 (febrero de 2009) la MAPP-OEA dijo que 153 municipios de Colombia de 28 zonas estaban afectadas por la presencia de estructuras emergentes, entre ellos varios municipios del Meta. En sus más recientes informes, ha mencionado situaciones particulares en este departamento. Por ejemplo, en su noveno informe, informó que la dinámica del conflicto en Meta y los Llanos Orientales estaba marcada por acciones y liderazgos de desmovilizados, como el ex comandante del frente Héroes del Guaviare, alias Cuchillo, y del antiguo aliado de Vicente Castaño, alias Don Mario. “En esta región se configuran otros liderazgos como los de alias Martín Llanos, comandante de las Autodefensas Campesinas de Casanare no desmovilizado, y alias Diego, quien reorganizó un nuevo reducto al norte del Casanare en límites con Vichada y Arauca”, señala dicho informe.

La OEA dice en su seguimiento que “cada una de las agrupaciones armadas ilegales o reductos no desmovilizados (y su relación) con el narcotráfico es cada vez más evidente” y que hay muy poca confrontación entre estas estructuras y la guerrilla. “Más allá de algunos

enfrentamientos en Nariño y Meta, la disputa entre organizaciones irregulares no parece darse por ahora. Incluso, en algunas regiones se han comenzado a generar alianzas que no tienen en cuenta las motivaciones ideológicas o políticas”.

Por su parte, la Policía Nacional ha identificado en el departamento la banda emergente Ejército Revolucionario Popular Antiterrorista Colombiano, que actúa en los municipios de Mapiripán, San Martín, Puerto Rico, Puerto Lleras, Puerto Gaitán y Puerto Concordia, y ha informado sobre la presencia de estructuras de alias H.H. en Acacías y Villavicencio.

Líderes sociales, organizaciones sociales, defensores de derechos humanos, indígenas, comunidades campesinas e instituciones como la Defensoría y la Personería han señalado que, a pesar de la desmovilización masiva de las autodefensas de este departamento, se mantienen algunas estructuras paramilitares y las estructuras que hay en el departamento están presionando a la comunidad de diferentes formas, una de ella a través de extorsiones y vacunas a comerciantes, ganaderos y empresarios.

Así mismo lo señala el último informe de la MAPP-OEA (abril de 2010):

“En el departamento del Meta, las estructuras emergentes realizan retenes ilegales en donde solicitan un recibo del pago de las vacunas que han pagado comerciantes y trabajadores como requisito para permitir el paso a determinados lugares y el transporte alimentos, medicinas o herramientas para su trabajo”.

## El reclutamiento forzado y el “re-reclutamiento”

La presencia de estas estructuras y de paramilitares no desmovilizados ha ido de la mano de otra de las problemáticas que afectan al Meta: la del reclutamiento de niños, niñas y jóvenes y el “re-reclutamiento” de desmovilizados.

Niños, niñas y jóvenes están siendo víctimas del reclutamiento por parte de estas estructuras que usan diferentes mecanismos, algunos de los cuales los mencionan los pobladores cuando se refieren a la problemática. Dice el más reciente informe de la MAPP-OEA:

“En algunos casos se reconoce como modalidad de reclutamiento el mecanismo de involucrar a las personas y en especial a jóvenes y menores de edad, por medio de sustancias psicoactivas, con el fin de crear dependencia, o entregando objetos de valor y dinero a los jóvenes para que demuestren ante sus compañeros y amigos el poder que pueden llegar a tener mediante su vinculación al grupo”.

El reclutamiento sigue siendo también una estrategia de las FARC para aumentar el número de hombres, dadas sus muertes en combate y la desertión de sus hombres, apro-



vechando para ello que esa ha sido una de sus zonas históricas y, además, que muchos de sus integrantes tienen a sus hermanos o hijos o familiares en poblaciones del sur del país. Esto ha sido un factor que ha llevado a integrantes de la sociedad civil a ser parte del grupo armado. En otros casos, ha sido la falta de oportunidades las que los han forzado a ingresar.

El reclutamiento forzado de niños y niñas ha sido también causa de múltiples desplazamientos individuales, así como de la separación de gran cantidad de familias, que optan por sacar a sus hijos e hijas de las zonas de riesgo y enviarlos a las ciudades, con el fin de evitar su vinculación.

En Villavicencio, que recibe el 50% de desplazados del departamento y de otros vecinos, se han denunciados casos de reclutamiento y de intentos sin éxito, que han obligado a que nuevamente el desplazado se haya tenido que movilizar.

Para dar un ejemplo de la magnitud del problema, en el Meta se han desmovilizado desde 1999 un total de 343 menores de edad, según el ICBF, entidad que ha reconocido que la cifra se estima que es mucho mayor.

Según el informe de la Gobernación del Meta, el reclutamiento de menores es una práctica recurrente y sistemática “que se ha intensificado a causa del proceso de expansión de grupos ilegales; que afecta las cabeceras municipales y centros poblados más pequeños, así como a los sectores pobres y marginados de los municipios más grandes, entre ellos Villavicencio, Granada, San Martín y Puerto Gaitán, entre otros”<sup>42</sup>.

Por otra parte, la Misión de la MAPP-OEA advirtió de los preocupantes casos de re-reclutamiento de desmovilizados y de las continuas amenazas y homicidios contra esta población, en un intento para que integren estructuras ilegales, como está ocurriendo en regiones del sur de Cesar, Casanare, Villavicencio (Meta), La Dorada (Caldas), Barrancabermeja (Santander), Tumaco (Nariño) y San José de Guaviare (Guaviare).

Hay que tener en cuenta que entre agosto de 2005 y 2006 se desmovilizaron 3.982 hombres y mujeres de cinco estructuras paramilitares que actuaban en el Meta en diferentes municipios, dos de las cuales se desmovilizaron, precisamente, en el departamento. Estas estructuras, como lo señala el Ministerio de Defensa, entregaron 2.624 armas.

El promedio de edad de estos desmovilizados es de 27 años y la mayoría nacieron en el Meta, especialmente Villavicencio, San Martín y Granada, y en Antioquia, en los municipios del Urabá antioqueño y Medellín.

De los desmovilizados, el 30,4% había cursado algún grado de primaria, el 15,1% terminó la primaria y solo el 6,6% dijo haber terminado el grado 11; el 86,6% no había recibido

El reclutamiento sigue siendo también una estrategia de las FARC para aumentar el número de hombres dadas sus muertes en combate y la alta desertión.

42 Oficina Promotora de Paz. *Visor 2003-2008, derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario en el Meta. Gobernación del Meta*, p. 53.

ninguna capacitación técnica antes de la desmovilización y sus principales expectativas después de la desmovilización se referían a la reunión con familiares. Entre 2005 y 2008, se desmovilizaron de manera individual, en Meta, 1.039 hombres y mujeres, según el Ministerio de Defensa. Esta caracterización de la población desmovilizada muestra realidades que hay que enfrentar. Por un lado, que su situación educativa y social los hace más vulnerables a volver a los grupos armados ante la falta de capacidades diferentes a las que han tenido en la vida armada. Por otro, que muchos de ellos se han quedado a vivir en el departamento porque allí están sus familiares, lo que seguramente ha significado el reencuentro de víctimas y victimarios. Y por último, que aún persiste desconfianza mutua entre pobladores y desmovilizados (cuadro 12).

**Cuadro 12. Desmovilizaciones de estructuras paramilitares que operaron en Meta**

Desmovilizaciones de estructuras paramilitares que operaron en el Meta						
Fecha	Grupo	Departamento	Comandante	Armas	Hombres	Zona de influencia
06/08/2005	Autodefensas del Meta y Vichada	Meta	José Baldomero Linares, alias Guillermo Torres	232	209	Puerto López y Puerto Gaitán
03/09/2005	Bloque Centauros "Los leales"	Casanare	Vicente Castaño	705	1.135	Granada, San Martín, El Dorado, El Castillo, Lejanías, Fuente de Oro, Guamal, Puerto López, Puerto Gaitán, Cumaral, Barranca de Upía
24/09/2005	Frente Vichada del BCB	Vichada	Macaco	282	325	Occidente del Meta
23/12/2005	Bloque Vencedores del Arauca	Arauca	Pablo Arauca	399	548	Norte del Meta
11/04/2006	Héroes del Llano	Meta	Pirata	1.006	1.765	Puerto López, Puerto Gaitán, San Martín
	Héroes del Gaviare		Cuchillo			San Martín, Mapiripán, Norte del Guaviare
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>2.624</b>	<b>3.982</b>	

Fuente: Ministerio de Defensa

## Los falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales

En los últimos años la población ha visto con alarma los llamados "falsos positivos", en los cuales han aparecido muertos pobladores del Meta.

En su confesión (17 de febrero de 2010), el ex paramilitar Don Mario dijo que 13 hechos de este tipo dejaron 36 víctimas y que agentes de la Policía y del Ejército les pedían a las au-



todefensas personas vivas o muertas, a quienes entregaban con uniformes y armas y luego aparecían en las estadísticas de las fuerzas militares como parte de sus resultados positivos.

“En varias ocasiones el ex jefe ‘para’ señaló que las AUC le entregaron personas a miembros del Batallón XXI Vargas, y en especial a su ex comandante, el coronel(r) Héctor Alejandro Cabuya de León ... Según ‘Don Mario’, el coronel(r) Cabuya trataba con “presión y extorsión” a los paramilitares, pidiéndoles personas que pudiera presentar como guerrilleros para “demostrar que era el que más resultados daba en ese batallón”<sup>43</sup>.

También señaló que en el Meta el bloque Centauros le pagaba 120 millones de pesos mensuales a oficiales de la Policía y el Ejército, que a veces recibían dinero extra cuando hacían colaboraciones especiales. Los organismos de investigación están verificando dichas declaraciones.

Durante 2007 y 2008, se presentaron en el Meta 46 víctimas de falsos positivos, el 8,5% de los ocurridos en todo el país, mientras que Norte de Santander (67 víctimas) y Antioquia (65) representaron el 12,4% y 12%, respectivamente.

Según el Centro de Investigación y Educación Popular, Cinep, entre 2005 y 2008 hubo 77 ejecuciones extrajudiciales en el departamento, el 42% de ellas ocurridas en Vistahermosa, el 15% en Puerto Rico, el 13% en San Juan de Arama, el 9% en El Castillo, el 6% en Mesetas, el 4% en Fuente de Oro, el 3% en Puerto Concordia y el 1% en Lejanías y Mapiripán.

En su visita a Colombia en 2009, el Relator Especial de las Naciones Unidas para las ejecuciones arbitrarias, Philip Alston, viajó a varias regiones en las que se han denunciado estos delitos, entre ella a Meta, y dijo:

“Aunque las matanzas de Soacha fueron flagrantes y obscenas, mis investigaciones demuestran que son simplemente la punta del iceberg. He entrevistado a testigos y a supervivientes que describieron matanzas muy similares en los departamentos de Antioquia, Arauca, Valle del Cauca, Casanare, Cesar, Córdoba, Huila, Meta, Norte de Santander, Putumayo, Santander, Sucre y Vichada. Una cantidad importante de unidades militares estaban involucradas en ello”<sup>44</sup>.

Según el informe de DH y DIH de la Gobernación, “después de algunas medidas tomadas en el último año y que han afectado a algunas autoridades militares en departamentos como Meta, Casanare, Córdoba y Arauca se ha notado una reducción en los meses recientes de tales violaciones”<sup>45</sup>.

43 *Las conexiones de ‘Don Mario’ en los falsos positivos del Meta. En Verdad Abierta, 18 de febrero de 2010.*

44 *Declaración del profesor Philip Alston, Relator Especial de las Naciones Unidas para las ejecuciones arbitrarias, misión a Colombia del 8 al 18 de junio de 2009, boletín de prensa.*

45 *Oficina promotora de Paz. Visor 2003-2008, derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario en el Meta. Gobernación del Meta, p. 42.*

## La desaparición forzada

En el Meta como en muchos departamentos del país este es un delito muy poco visibilizado porque las familias temen denunciar la desaparición de un ser querido por temor a represalias.

Según la Oficina promotora de paz de la Gobernación del Meta y su informe Visor 2005-2008, sobre los DH y el DIH, este delito empezó a denunciarse mucho más a raíz de los planes de reparación administrativa. Hay 598 denuncias presentadas ante la Fiscalía entre 2005 y 2008, las cuales están en proceso de investigación. El año más crítico fue 2008, que registra 386 desaparecidos (cuadro 13).

**Cuadro 13. DESAPARICIÓN FORZADA - META**

Municipios	2005	2006	2007	2008	Total
Mapiripán	3	0	0	0	3
Vistahermosa	8	6	0	2	16
Puerto Rico	0	0	0	1	1
Mesetas	2	0	0	1	3
Puerto Concordia	4	0	0	1	5
La Macarena	2	0	0	3	5
Uribe	1	1	0	0	2
Puerto Gaitán	14	5	0	1	20
Villavicencio	42	33	21	166	262
Lejanías	0	0	0	3	3
Puerto Lleras	0	0	1	3	4
Puerto López	7	0	0	4	11
San Juan de Arama	1	2	0	1	4
Granada	16	6	2	175	199
San Martín	15	7	1	13	36
Restrepo	1	3	0	7	11
Barranca de Upia	1	2	0	3	6
Cumaral	2	1	0	0	3
Acacías	0	0	1	1	2
El Castillo	1	0	0	0	1
San Juanito	0	0	0	1	1
<b>TOTAL</b>	<b>120</b>	<b>66</b>	<b>26</b>	<b>386</b>	<b>598</b>





El 76% de los desaparecidos eran hombres agricultores, independientes, estudiantes y empleados, lo que evidencia el impacto en la sociedad si se considera que la mayoría de las familias dependen del sustento del hombre. Villavicencio es el municipio que registra la mayor cantidad de casos en los últimos años, seguido por Granada, San Martín, Puerto Gaitán y Vistahermosa.

## 5. Escenarios posibles y tendencias

### Agudización del problema de la tierra y del impacto social

- ▶ Esta es una de las tendencias que se perciben en la población, señalada con preocupación por las comunidades, las organizaciones sociales, la Iglesia, la Defensoría y la Personería y otros organismos del Estado.
- ▶ Las dinámicas que se están dando en la región alrededor de cultivos como palma y la caña para la producción de biocombustibles y etanol y el aumento para tal fin de la explotación de la tierra por parte de grandes empresarios y de compañías internacionales muestran un complejo escenario social y económico para sectores como el campesinado, que es uno de los más afectados por este tipo de desarrollo.
- ▶ La situación también tiende a impactar a los indígenas porque están siendo ocupadas sus áreas de reserva, porque muchos otros están arrendándoles sus tierras a los grandes productores y porque, frente a la falta de opciones, están llegando masivamente a la capital y a otros centros urbanos.
- ▶ Los desplazados son otra población en la que esta problemática tiene un impacto directo, más ante las limitaciones en la titulación y restitución de tierras, una situación que se presenta en todos los municipios y que es uno de los grandes desafíos para la institucionalidad. Hay preocupación entre las mujeres y sus organizaciones porque están siendo víctimas de amenazas por defender los derechos de la población desplazada y temen que esto se agudice.
- ▶ Se teme que continúe el negocio de la compraventa de la tierra y la apropiación de la misma por medios legales e ilegales, también por parte de grandes productores de estos cultivos y de multinacionales, que aumenten la concentración de la misma en pocas manos. A este hecho se suma el abandono de hectáreas por parte

de campesinos que están buscando opciones por la deficiencia en los programas de sustitución de cultivos ilícitos.

- ▶ El uso del suelo para la producción de biocombustibles, sin tener en cuenta su uso tradicional y condiciones climáticas, podría continuar desplazando los cultivos básicos del Meta, que sirven no solo para el consumo interno del departamento sino para otras regiones del país, como la capital.
- ▶ Para líderes comunitarios, de la región el hecho de no tener los títulos de sus tierras se ha convertido en uno de los principales obstáculos para ejercer sus derechos y les hace más difícil desarrollar proyectos productivos. Asimismo, han denunciado que hay numerosos compradores asociados al narcotráfico, paramilitares y estructuras emergentes que quieren sus tierras. En ese sentido, existe la tendencia de que la problemática continúe y se agudice si no se da un paso clave: el reconocimiento de los títulos de propiedad. Otra situación igual de preocupante sigue sin resolver: los campesinos sin tierra.
- ▶ Los intereses de los diferentes actores que tienen relación con la tierra en el Meta –campesinos, comunidades indígenas, compañías internacionales, empresas, grupos armados ilegales y narcotraficantes– ya está generando delicados problemas de convivencia entre algunos de ellos y sigue siendo un motor del conflicto armado.
- ▶ No hay una voz desde las diferentes instancias institucionales que esté advirtiendo sobre los riesgos del nuevo modelo económico de la región, y se teme que esta siga siendo la tendencia.

## Aumento en la pobreza y las necesidades básicas insatisfechas

- ▶ Una de las principales controversias en el Meta es que el crecimiento progresivo de la economía del Meta –con la explotación del crudo y las regalías que se obtienen, entre otros factores– contrasta con la situación social y económica de sus habitantes. Aunque hay crecimiento, este no se ha reflejado en un mejoramiento de la situación de las poblaciones en mayor estado de vulnerabilidad, lo que parecería ser una tendencia en el territorio.
- ▶ Los altos índices de pobreza en el departamento tienden a aumentar no solo por el modelo de desarrollo que está imperando y que beneficia de manera especial a los grandes empresarios, sino por la corrupción en las administraciones públicas. Si no aumentan los controles y no hay una veeduría, no será posible que los recursos públicos –entre ellos los de las regalías– se usen de manera prioritaria para responder a la situación social de los pobladores del Meta.



- ▶ Existe el riesgo de que se agraven aún más las condiciones de vida de poblaciones , como los desplazados, no solo a raíz del problema de la tierra sino de otras dinámicas en el territorio ya mencionadas.
- ▶ Hay una tendencia hacia la agudización de la situación social de pobladores en general por la llegada de numerosas comunidades desplazadas provenientes de veredas, diferentes municipios y otras regiones de Colombia. El caso que de manera unánime señalan las comunidades y las principales autoridades es el de Villavicencio, donde se ha registrado un aumento exagerado de población, ante el cual las autoridades no han tenido los recursos suficientes para integrar económica y socialmente a estos nuevos habitantes. La institucionalidad tiene el reto de responder a las necesidades de esas nuevas poblaciones.
- ▶ La explotación de petróleo aumentará en la región por el reciente hallazgo de nuevos y productivos pozos, como el pozo Quifa en Puerto Gaitán. Si bien esto puede ser una oportunidad para que los nuevos recursos que lleguen se inviertan en las comunidades, se teme que esto tenga un impacto social fuerte en la población. La historia ha demostrado que en municipios a los que llega el boom del petróleo hay una transformación de valores, económica y social. Para algunos, el “petróleo ha sido más una maldición que una bendición porque detrás de él aparecen la prostitución, las enfermedades, la corrupción, el aumento de la criminalidad y los armados”.
- ▶ Aunque se ha dado una importante disminución de los cultivos ilícitos con relación a los últimos años, según cifras del Simci, estos siguen siendo uno de los problemas principales de la región, por los efectos que tiene en su economía, su vida social (directamente en las finanzas de los hogares) y su cultura.
- ▶ Entre las comunidades –especialmente entre las mujeres y las víctimas– hay una tendencia a darle énfasis al desarrollo de proyectos productivos para responder a la situación social. Estos también se han convertido en una necesidad de los hogares, para que la mujer entre a complementar la economía del hogar.
- ▶ De la misma forma, campesinos y organizaciones esperan que así como hay un fuerte apoyo económico y político a los cultivos de palma, también se brinde a otros y a los que registran menos y menos producción. Por eso proyectos productivos diferentes a los de los megaproyectos empiezan a ser parte importante en sus agendas de trabajo y de acción política

## La agudización de la confrontación armada y los problemas de seguridad

El Gobierno y las Fuerzas Armadas han ganado espacios importantes, los cuales deben ser consolidados con desarrollo y respeto a los derechos humanos.

- ▶ Se teme que en el escenario futuro el conflicto armado sea mucho más intenso. Por un lado, por la presencia de las fuerzas militares y sus intentos, en plena campaña electoral y unos meses antes de finalizar el Gobierno, de dar importantes golpes contra la guerrilla. El aumento de la presencia militar coincide, según la Defensoría del Pueblo, con un aumento de las violaciones de los derechos humanos. Por otro, por la estrategia de la guerrilla de mostrarle su poder territorial y armado al nuevo Gobierno. Y, además, porque persisten las causas estructurales y coyunturales que han sido el motor del conflicto armado en las últimas décadas. La población seguirá siendo la más afectada en medio del conflicto.
  - ▶ La política de seguridad democrática ha logrado neutralizar a algunos actores armados ilegales, por lo cual la presencia institucional en el territorio seguirá siendo un factor determinante. Por una parte, la guerrilla continúa ejerciendo poder en varias regiones por su presencia histórica y sus intereses alrededor del narcotráfico, aunque está debilitada. El uso de minas antipersonal seguirá siendo un instrumento para contrarrestar el avance militar en sus territorios tradicionales. Por otra, los paramilitares no desmovilizados continúan haciendo presencia en defensa de sus negocios del narcotráfico y de la adquisición de tierra. Asimismo, se teme una presencia mayor de estructuras emergentes, que para algunos están protegiendo a los narcotraficantes.
- ▶ Se advierte una tendencia a la intensificación de la conflictividad en la zona rural, donde hay menos presencia del Estado y más de grupos armados ilegales. “El conflicto se está metiendo aún más en el campo”.
- ▶ Hay regiones del Meta en donde el Gobierno está consolidando su presencia con las Fuerzas Armadas y ha ganado espacios importantes, pero si esos espacios no se consolidan con desarrollo y respeto a los derechos humanos se generarán nuevas frustraciones en la población y aumentará la desconfianza entre ella y la institucionalidad. Existe el temor de que esto ya esté ocurriendo.
- ▶ También se prevé que el Plan Consolidación de La Macarena continuará fortaleciendo sus acciones cívico-militares, colocando en riesgo a la población por ser señalada de estar de uno u otro lado.
- ▶ La tendencia que se observa es que las intimidaciones a los líderes y organizaciones sociales, las amenazas y las violaciones de los derechos humanos continúen debido a la presencia de diferentes grupos armados y los intereses económicos y políticos que están en juego en el territorio.



- ▶ Un hecho preocupante, que tiende a agudizarse, es el reclutamiento forzado de niños, niñas y jóvenes, incluyendo a indígenas. Las milicias de los grupos armados ilegales se siguen moviendo en cabeceras municipales y departamentales.
- ▶ Se está dando una dinámica en la región que se está convirtiendo en una constante: el aumento de la inseguridad ciudadana en centros urbanos, como en Villavicencio. La capital se ha convertido en una ciudad receptora de delincuentes, desmovilizados e ilegales que llegan de Bogotá los fines de semana para delinquir.
- ▶ Aunque han disminuido los homicidios, otros delitos como el carterismo o el robo a mano armada han aumentado en los centros urbanos, en una tendencia creciente.

## Incremento de la problemática en poblaciones de mayor vulnerabilidad

Las dinámicas de la conflictividad, las situaciones sociales y económicas y los programas de seguridad y de desarrollo que se están ejecutando en la región tienden a seguir afectando de manera especial a las poblaciones en estado de mayor vulnerabilidad.

- ▶ Las mujeres son quienes están sufriendo la carga del conflicto armado de forma especialmente dramática y por eso reclaman una mayor atención por parte del Estado, la cual reclaman a través de sus organizaciones y movimientos sociales por la paz. Las mujeres organizadas, con sus diferentes intereses, sostienen una dinámica orientada a afirmarse como actrices políticas de peso y, para ello, están organizando sus demandas y acciones por el respeto de sus derechos, aun en medio del conflicto, así como siguen reclamando garantías para su plena participación en todas las decisiones que comprometen su desarrollo y la paz.
- ▶ La niñez y la juventud continúan en riesgo de ser reclutados de manera forzada por diferentes grupos armados y por la delincuencia común, ante la ausencia de oportunidades, la violencia intrafamiliar, la falta de escenarios para el uso del tiempo libre y las percepciones culturales, como el valor a quien tiene un arma o un uniforme.
- ▶ La situación de los indígenas y de la población desplazada sigue produciendo preocupación ante la precariedad en la que viven, la constante violación de sus derechos, principalmente sobre el derecho a la tierra, y la amenaza constante del reclutamiento forzado de sus integrantes, en especial menores de edad. Esto contrasta con la capacidad de esta población como actores de construcción de paz y de escenarios de convivencia social.

Hay la tendencia a que Meta siga siendo uno de los departamentos que más expulsa población, no solo a causa del conflicto armado (confrontaciones armadas y presencia de guerrilla, paramilitares y bandas) sino también por la situación social y económica, por las fumigaciones y por las amenazas de la que están siendo víctimas para expropiarles sus tierras con el fin de desarrollar en ellas grandes proyectos agroindustriales, entre otros factores.

## Creciente interés en continuar con esfuerzos de construcción de paz

En la actualidad, hay una escasa interlocución de líderes sociales, organizaciones y escenarios de articulación social con la institucionalidad, situación que tiende a continuar, dada la polarización que se vive en la región.

Los diferentes representantes y voceros de la sociedad civil insisten en que el conflicto armado sigue teniendo un impacto importante en ella, sin embargo hay un creciente interés de continuar con los esfuerzos de construcción de paz y de buscar salidas para la solución pacífica de los conflictos.

## 6. Identificación de caminos a seguir

### Prevención y mitigación de efectos del conflicto

- ▶ El reclutamiento de niños, niñas y jóvenes y el re-reclutamiento de desmovilizados son dos problemáticas de especial atención para las comunidades y autoridades, que exige un trabajo coordinado en el territorio.  
Es estratégica y necesaria una alianza entre el PNUD y la Unicef para responder a esta problemática y, además, un trabajo coordinado entre la cooperación internacional y la institucionalidad y los actores sociales.  
Es imprescindible apoyar y complementar esfuerzos técnicos y financieros en iniciativas orientadas a la prevención del reclutamiento desde diferentes instancias, como la Mesa de infancia y adolescencia, la Mesa de jóvenes y otros grupos poblacionales de la Mesa humanitaria del Meta y las instituciones públicas.

También es prioritario fortalecer a los actores estratégicos del Meta para el reconocimiento y ejercicio de los derechos de la infancia, como vía para prevenir la vinculación y el reclutamiento armado.

Especial atención deberán tener los escenarios de articulación y de encuentro de los jóvenes y de sus organizaciones locales y departamentales, como la Mesa de jóvenes del Meta. Es importante continuar con su fortalecimiento e impulsar que las y los jóvenes se apropien del concepto y el enfoque de los derechos humanos, la no-violencia y la incidencia en políticas públicas.

- ▶ Ante los numerosos desmovilizados que están viviendo en el Meta y las relaciones que se han dado entre víctimas y victimarios, es importante identificar posibles acciones e iniciativas en torno a los procesos de integración o reintegración comunitaria.

Se requiere para ello promover iniciativas de articulación entre las diferentes instituciones (Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, MAPP-OEA) y de la cooperación internacional (por ejemplo OIM).

- ▶ El aumento de minas antipersonal y de víctimas de éstas exige implementar una estrategia de acción integral contra estos artefactos y desarrollar un trabajo coordinado sobre la problemática con agencias del Sistema de Naciones Unidas y la cooperación internacional. Especial énfasis se les deberá dar al fortalecimiento institucional, la educación en el riesgo, la asistencia a víctimas y la gestión territorial. En ese sentido, será necesaria la articulación con actores que trabajan en el territorio, como la Presidencia de la República, la Gobernación y el Comité Departamental de Programa de Asistencia a la Acción Integral contra las Minas Antipersonal (Aicma) del Meta, entre otros. El PNUD deberá continuar trabajando por el fortalecimiento de las organizaciones, de los espacios sociales de articulación y de la institucionalidad, en dirección a hacerle frente al problema.

Es necesario brindarle a esta población –y a las demás que se mencionan en esta análisis– acompañamiento y asesoría técnica en la formulación de las políticas públicas y, posteriormente, facilitar escenarios de encuentro entre estas redes sociales y los entes territoriales para la inclusión de sus propuestas en las políticas públicas y en escenarios de toma de decisiones. Para esta labor se requiere una articulación con Acnur, UNFPA, Unifem, OIM y OACNUDH.

- ▶ Ante la situación humanitaria de la población desplazada y la agudización del problema de la tierra, es necesario el apoyo a la implementación de políticas públicas y de iniciativas para la garantía y el reconocimiento de sus derechos. Una coordinación especial tendrá que darse entre el PNUD y la Acnur, que tiene oficina en el Meta. De igual forma, será necesaria la búsqueda de incidencia en las políticas públicas, en un trabajo coordinado con las mesas municipales y departamentales

de población desplazada. Frente a las numerosas iniciativas e instancias que hay en el territorio sobre el tema, es importante buscar la articulación de esfuerzos y de recursos.

En consideración a que la población en situación de desplazamiento ha expresado su deseo de regresar, y ya lo ha hecho, en el marco de la iniciativa interagencial en Early Recovery, PNUD-Acnur, será imperioso apoyar a las comunidades que han retornado y ya se han reubicado, con el fin de que vuelvan a gozar de todos sus derechos.

El PNUD deberá continuar trabajando por el fortalecimiento de las organizaciones y de los espacios sociales que están defendiendo los derechos de la población y de las instituciones que tienen responsabilidad directa frente a esta problemática, con el fin de mejorar su capacidad de respuesta. Será importante promover que líderes de la población se integren a los procesos organizativos locales y departamentales. Se debe garantizar que en estos procesos participen de manera activa las mujeres y sus organizaciones, así como los jóvenes.

- ▶ Por el impacto del problema de tierra en la población, tanto en la desplazada como en aquella que se está viendo afectada por megaproyectos, este deberá ser un tema prioritario en la agenda de intervención del PNUD en la región del Meta, más aún si se tiene en cuenta que esta continúa siendo una de las causas estructurales de la conflictividad en el territorio. Será necesario tener una visión integral de la problemática y, al mismo tiempo, promover una discusión amplia, el intercambio de experiencias y el trabajo en red para que las posibles soluciones hagan parte de la agenda pública y política, departamental y municipal.

En la misma dirección, será menester continuar fortaleciendo organizaciones campesinas y otras que trabajan con énfasis en la problemática y seguir acompañándolas, técnica, política y financieramente. Asimismo, una especial atención se le deberá dar a las instituciones públicas de los Gobiernos departamental y municipal, así como nacionales, que tienen competencia en la materia, como el Ministerio Público.

Los campesinos y las campesinas, que históricamente han reclamado el derecho a sus tierras y exigen del Estado una redistribución más equitativa de la misma, deberán ser una población de especial atención en la intervención del PNUD. Por un lado, es necesario apoyar el trabajo de instancias como la Mesa de Tierras e iniciativas productivas, y fortalecer la capacidad de negociación e incidencia de la organización campesina, mediante diferentes vías, como la consolidación de la base social de ANUC Meta. Por otro, el PNUD debe promover espacios entre organizaciones campesinas y otras poblaciones excluidas (como los indígenas, los afros, la población en situación de desplazamiento) para participar en diálogos





con entidades públicas, con el objeto de ampliar y restituir el acceso, el uso y el control de tierras y otros activos productivos, y buscar incidencia en las políticas públicas.

Se debe garantizar que en estos procesos participen de manera activa las mujeres y sus organizaciones, así como los jóvenes.

Teniendo en cuenta que el PNUD está liderando el Informe Nacional de Desarrollo Humano 2010 sobre el desarrollo rural, será imperioso que el Meta pueda contribuir en dicho estudio y, al mismo tiempo, que este le sirva a la región. Así, es importante promover un proceso de diálogo público y una consulta amplia en la que participen los sectores políticos, sociales y económicos y actores relevantes de la región sobre la problemática y un modelo de desarrollo incluyente.

- ▶ Como la conflictividad en Meta tiene un efecto particular en los grupos étnicos, es imperiosa una atención a esta población y un trabajo desde diferentes frentes. De un lado, contribuir a su empoderamiento y su incidencia y acompañar y fortalecer a la Mesa indígena en su proceso organizativo y de interlocución con la institucionalidad pública. Además, es indispensable continuar apoyando el proceso de formación autónoma de líderes indígenas para la democracia y la participación ciudadana para su incidencia política; la promoción, difusión y reconocimiento de sus derechos y deberes. De otro, es preciso impulsar su participación en espacios de diálogo, articulación y concertación.

En tal sentido, es importante apoyar iniciativas conjuntas intergeneracionales en Early Recovery (PNUD-Acnur) con enfoque integral de construcción de paz y en comunidades vulnerables y tradicionalmente excluidas en el Meta, específicamente de las comunidades indígenas.

- ▶ Las negritudes, otra de las poblaciones en estado de mayor vulnerabilidad en el departamento, también deberán tener una atención especial. El PNUD deberá continuar con su trabajo para lograr su fortalecimiento y empoderamiento. Al mismo tiempo, es imperioso acompañar a estas poblaciones y a la institucionalidad para poner en marcha instrumentos relevantes, como la Comisión Consultiva Departamental de Organizaciones de Comunidades Negras. Además, el PNUD podrá ser una instancia para promover y generar espacios de interlocución entre las instituciones del Estado y estas comunidades.

Es así como es necesario acompañar la formulación del Plan de etnodesarrollo y el espacio de la consultiva de la población afro, que son vistos como prioridad

El aumento de minas antipersonal y de víctimas de éstas exige implementar una estrategia de acción integral contra estos artefactos.

Es necesario apoyar el trabajo de instancias como la Mesa de Tierras e instancias productivas, y fortalecer la capacidad de incidencia de la organización campesina.

por el PNUD, y es una recomendación de la asistencia técnica local del tercer Laboratorio de Paz.

- ▶ Ante el efecto especial y diferencial de los conflictos en las mujeres, se exige impulsar en el departamento, en su institucionalidad y sus organizaciones y espacios sociales la perspectiva de género, empezando por tener un diagnóstico sobre la política pública de equidad para las mujeres.

Es imperioso continuar con los procesos de capacitación, intercambio de experiencias y fortalecimiento de sus procesos organizativos y buscar su articulación en torno a propuestas incluyentes de construcción de paz.

También, será necesario fortalecer la capacidad de las organizaciones de mujeres para identificar, acompañar y hacer seguimiento de casos de violencia basada en género, y apoyar organizaciones de mujeres para su acceso a procesos de verdad, justicia y reparación. Hay que seguir fortaleciendo instancias como la Red Departamental de Mujeres y Organizaciones para identificar, orientar y hacer seguimiento a casos de violencia basada en género.

En esta labor seguirá siendo estratégica la alianza de intervención territorial PNUD-Unifem.

- ▶ Es necesario impulsar en el territorio y entre sus diferentes actores la reflexión sobre la situación que se vive en los distintos ámbitos (situación humanitaria, modelo de desarrollo, problemas sociales) con el fin de lograr consensos sobre los caminos a seguir y, al mismo tiempo, como vía para lograr articulaciones y mecanismos para superar la polarización. En el mismo sentido, ante la diversidad de actores en la región, es recomendable impulsar análisis sobre el tipo de intervención, cómo lograr su eficacia y de qué manera maximizar sus efectos positivos y minimizar los negativos.

## Transformación de conflictos y cultura de paz

- ▶ Es necesario fortalecer y acompañar a espacios que desde las organizaciones promueven el trabajo ambiental, en una cultura de paz en el territorio.
- ▶ Frente a la violencia generalizada e histórica en la región, es necesario promover una cultura de paz, procesos y mecanismos que creen condiciones para el diálogo y metodologías de mediación y transformación no violenta de los conflictos. Es recomendable brindar acompañamiento y asistencia técnica en estos temas a redes sociales y poblacionales, medios de comunicación, actores del Estado y a otros estratégicos del Meta.



Especial atención deberá darse a los medios tradicionales de comunicación local y nacional, y a los medios y redes comunitarias, ciudadanas o alternativas, por el papel que cumplen en la sociedad en la creación y reafirmación de valores. En tal sentido, hay que capacitar y sensibilizar a estos actores sobre construcción y cultura de paz, implementando para ello una estrategia para los ámbitos nacional y territorial y buscando su fortalecimiento.

Será necesario promover, en organizaciones y redes sociales, estrategias de comunicación para la paz y escenarios de encuentro y trabajo en alianza regional e interregional.

- ▶ Para mejorar la operación y toma de decisiones estratégicas, se requiere promover espacios de intercambio de experiencias entre regiones (ferias, intercambios) y la sistematización de buenas prácticas y de lecciones aprendidas sobre construcción de paz con enfoque regional.
- ▶ Como herramienta para la toma de decisiones y mecanismo de prevención, es importante fortalecer las capacidades de análisis y planeación sensible a los conflictos en actores estratégicos del territorio y, así, facilitar procesos de formación e intercambios de experiencias entre los diferentes sistemas de observación sobre los conflictos y activos de paz que hay en el territorio (Mesa humanitaria, Banco de Datos, Observatorio de DDHH y del Territorio, Grupo Sur-Oriente, entre otros). Asimismo, como instrumento para la planeación estratégica, se requiere hacer un seguimiento sistemático de la evolución y las tendencias de los conflictos y de los esfuerzos de construcción de paz, así como promover entre actores estratégicos de la región las capacidades en temas de sensibilidad al conflicto (mainstreaming) y de recuperación temprana.

## Verdad, justicia, reparación y derechos humanos

- ▶ Es prioridad continuar con el apoyo y fortalecimiento de las organizaciones de víctimas del Meta y de escenarios de articulación regional, como la Mesa humanitaria, y de otros que se consideren importantes para impulsar la movilización, la visibilización y las acciones en beneficio de esta población, los derechos a la verdad, la justicia y la reparación.

Prioritario tendrá que ser el apoyo para que las víctimas y sus organizaciones incidan en políticas públicas, en los ámbitos local y nacional, y en escenarios clave en la toma de decisiones, en temas como la verdad, la justicia, la reparación, la recuperación de la memoria histórica y los derechos humanos.

- ▶ La justicia y la lucha contra la impunidad siguen siendo uno de los principales reclamos de las víctimas del Meta, desde hace décadas, lo que exige identificar cuáles son las debilidades y capacidades de las instituciones del Estado para iniciar acciones que permitan facilitar el acceso de las víctimas a la justicia.

Hay que apoyar a instituciones del Estado, al sistema judicial y a los espacios de coordinación nacionales y regionales (como el Comité Interinstitucional Regional de Atención Integral a Víctimas) para su fortalecimiento, para que adopten mecanismos que faciliten el acceso de las víctimas a la justicia y se gestione e implemente un plan de atención integral. Un énfasis especial se les deberá dar a las víctimas ubicadas en zonas distantes donde el Estado no tiene mucha presencia.

En la búsqueda de fortalecer el sistema de justicia y sus instituciones, será necesario implementar rutas de prevención, atención y acceso a la justicia de casos especiales, como los de las mujeres y niñas víctimas de violencia basada en género. Es preciso brindar un apoyo, técnico, logístico y operacional a las instituciones del Estado, al sistema judicial y al Ministerio Público del Meta para el avance de procesos judiciales que han sido simbólicos en el departamento y que han creado la sensación de impunidad y de debilidad institucional.

De igual forma, se requiere conocer las debilidades y fortalezas de actores fundamentales del territorio, como las personerías municipales, e impulsar sus capacidades técnicas y operativas para facilitar el acceso de las víctimas a las instancias de verdad, justicia y reparación.

- ▶ La protección y garantía de los derechos humanos deberá seguir siendo una prioridad en el territorio, en un trabajo concertado entre el PNUD y la OACNUDH, en diferentes ámbitos.

Uno, es necesario continuar con el fortalecimiento de instituciones del Estado que tienen responsabilidad en materia de derechos humanos en el territorio y hay que seguir brindándoles apoyo técnico-logístico para que aumente su capacidad de respuesta ante las numerosas violaciones a los derechos humanos de la población.

Dos, es imperioso seguir impulsando el empoderamiento de las organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil (incluyendo las mesas de derechos humanos y humanitarias) en su capacidad técnica y de incidencia. Tres, se requiere promover y consolidar espacios de diálogo y de relación entre organizaciones de derechos humanos y sociales y la institucionalidad pública, en materia de derechos humanos y DIH y de riesgos de violaciones de los derechos de comunidades, en especial de poblaciones vulnerables y tradicionalmente excluidas.

Hay que continuar con el apoyar técnico, político y financiero al Programa Regional de Desarrollo y Paz (Cordepaz) y a otras iniciativas territoriales de desarrollo y paz, como la Mesa humanitaria.



Por ser Cordepaz la corporación dinamizadora del PDP del Meta y la entidad coordinadora regional del tercer Laboratorio de Paz, es preciso contribuir a su fortalecimiento institucional y operativo; a la consolidación de sus iniciativas de desarrollo y paz; al desarrollo de las acciones estratégicas de la alianza Cordepaz/ UNFPA (como la revisión y actualización de los planes de ordenamiento territorial) y al aumento de su nivel de relacionamiento y articulación con instituciones públicas y privadas locales, departamentales y nacionales.

## Gobernabilidad, democracia local y construcción de paz

- ▶ El desarrollo, la paz y la reconciliación tendrán que estar en la agenda del PNUD en el Meta, mediante la promoción del diálogo entre las instituciones públicas y las organizaciones sociales, en los ámbitos nacional y territorial, en torno a la formulación participativa de políticas relacionadas con estos tres temas y con un enfoque diferencial y de derechos. En el mismo sentido, es prioritario impulsar el trabajo conjunto entre los diferentes actores del territorio para la formulación y puesta en marcha de políticas públicas.
- ▶ Ante la debilidad institucional del departamento y la necesidad de consolidar la democracia local, es imprescindible apoyar procesos de veeduría electoral, social, gremial y de los medios de comunicación.
- ▶ Es ineludible promover procesos participativos de identificación y priorización de agendas temáticas de desarrollo, paz y reconciliación para que sean incluidas en programas de Gobierno (pactos de gobernabilidad, procesos constituyentes).
- ▶ Es necesario fortalecer la participación democrática de la sociedad civil en los consejos territoriales de planeación y otros espacios para construir agendas de desarrollo local, apuestas políticas territoriales en construcción de paz y hacerle seguimiento, evaluación y control social a las políticas públicas.

## Desarrollo social y económico sostenible para la paz

- ▶ Ante la pobreza, la inequidad y la desigualdad históricas en el Meta, es menester promover reflexiones, y acciones, entre el Estado, la sociedad civil y el sector privado sobre un desarrollo regional incluyente, en el que participen de manera activa las organizaciones campesinas, entre otras.
- ▶ Frente a las problemáticas particulares que enfrentan los indígenas en algunos municipios del Meta, es indispensable promover espacios de diálogo entre estas

comunidades y la empresa privada sobre el respeto a sus derechos, entre ellos el derecho a la consulta previa.

- ▶ Se requiere impulsar la formulación e implementación, en aquellos municipios más excluidos, de proyectos de desarrollo que sean autosostenibles, replicables, viables y que puedan ser modelos de desarrollo alternativo.

En ese sentido, hay que brindar apoyo técnico y financiero a aquellas propuestas productivas de mujeres y otras poblaciones en estado de mayor vulnerabilidad.

También será prioritaria la articulación con organismos e iniciativas que están trabajando en proyectos productivos y la complementariedad de acciones en el marco del tercer Laboratorio de Paz.

- ▶ Es necesario de trabajar de manera articulada con el equipo que está elaborando el Informe Nacional de Desarrollo Humano, teniendo en cuenta que su tema central será el desarrollo rural y, en ese sentido, la problemática de la tierra es un eje central.
- ▶ Para el fortalecimiento de la oficina territorial del Meta, es una prioridad diseñar e implementar un sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación de las actividades y proyectos y de su ejecución teniendo en cuenta las directrices estratégicas.





El propósito de la estrategia  
ART - REDES es promover  
condiciones y ambientes propicios a la  
búsqueda de la paz en Colombia.

En estos años de trabajo, la intervención territorial  
se ha focalizado en los Montes de María, Meta, Oriente  
Antioqueño, Nariño y Huila y Piedemonte Amazónico. Desde  
el 2009, también está en Cesar.

Son cuatro los ejes de esta estrategia, que hacen referencia a las  
cuatro dimensiones fundamentales del desarrollo humano:

- Prevención y transformación de conflictos y promoción de una cultura de paz
- Justicia, derechos de las víctimas y derechos humanos
- Gobernabilidad, democracia local y construcción de paz
- Desarrollo socioeconómico sostenible para la paz

